

CONGRESO NACIONAL  
CAMARA DE SENADORES  
SESIONES ORDINARIAS DE 2006  
ORDEN DEL DIA N° 1319

Impreso el día 30 de noviembre de 2006

SUMARIO

COMISION DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

Dictamen en distintos proyectos de ley de varios señores senadores sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. SE ACONSEJA APROBAR OTRO PROYECTO DE LEY.(S-1712-2948-4068/05 y 10-433-1237-2557/06)

DICTAMEN DE COMISION

Honorable Senado:

Vuestra comisión de Justicia y Asuntos Penales ha considerado el proyecto de ley del senador Falcó (S-1712/05) modificando diversos artículos del Código Penal acerca de la venta de menores; el proyecto de ley del senador (MC) Agundez (S-2948/05) de represión de la trata de personas y asistencia a sus víctimas; el proyecto de ley del senador Pichetto (S-4068/05) modificando el artículo 127 del Código Penal sobre ejercicio de la prostitución; el proyecto de ley del senador Capitanich (S-10/06) modificando el Código Penal respecto de las penas por delitos contra la integridad sexual; el proyecto de ley del senador Basualdo (S-433/06) modificando el Código Penal respecto de las penas por explotación de menores; el proyecto de ley de la senadora Perceval (S-1237/06) modificando el Código Penal en lo que respecta a delitos sexuales que afectan a menores; el proyecto de ley de la senadora Giri (S-2557/06) contra el delito de trata de personas y sistema de información, protección y amparo a la víctima; y teniendo a

la vista el proyecto de ley de las senadoras Perceval y Kirchner (S-2083/06) de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas; y, por las razones que dará el miembro informante y los fundamentos que se acompañan, os aconseja la aprobación del siguiente

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

### PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS

#### TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° - Objeto. La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas y asistir a sus víctimas.

Art. 2° - Trata de mayores de 18 años. Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado - ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior -, la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta.

Art. 3° - Trata de menores de 18 años. Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado -ya

sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas menores de dieciocho años de edad, con fines de explotación.

Existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de 18 años no tendrá efecto alguno.

Art. 4° - Explotación. A los efectos de la presente ley, existe explotación en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas;
- b) cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
- c) cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual;
- d) cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.

Art. 5° – No punibilidad. Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.

Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara.

## TÍTULO II

### DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

Art. 6° - Derechos. Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a:

- a) recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez;
- b) recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada;
- c) contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas;
- d) prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;
- e) la protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las condiciones previstas en la ley 25.764;
- f) la adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica;
- g) ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;
- h) ser oídas en todas las etapas del proceso;
- i) la protección de su identidad e intimidad;
- j) permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia;
- k) que se les facilite el retorno al lugar en el que estuviera asentado su domicilio;
- l) acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrán ser sometidos a careos. Las medidas de protección de derechos aplicables no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reintegración a su familia nuclear o ampliada o a su comunidad.

Art. 7° - Alojamiento de las víctimas. En ningún caso se alojará a las víctimas de la trata de personas en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.

Art. 8° - Derecho a la privacidad y reserva de identidad. En ningún caso se dictarán normas que dispongan la inscripción de las víctimas de la trata de personas en un registro especial, o que les obligue a poseer un documento especial, o a cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación.

Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas. Las actuaciones judiciales serán confidenciales. Los funcionarios intervinientes deberán preservar la reserva de la identidad de aquéllas.

Art. 9° - Representantes diplomáticos y consulares. Es obligación de los representantes diplomáticos y consulares de la Nación en el extranjero proveer a la asistencia de los ciudadanos argentinos que, hallándose fuera del país, resultaren víctimas de los delitos descriptos en la presente ley, y facilitar su retorno al país, si así lo pidieren.

### TÍTULO III

#### DISPOSICIONES PENALES Y PROCESALES

Art. 10 - Incorpórase como artículo 145 bis del Código Penal, el siguiente:

“Artículo 145 bis.- El que capture, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediaré engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de

una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, será reprimido con prisión de 3 a 6 años.

La pena será de 4 a 10 años de prisión cuando:

1º el autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;

2º el hecho fuere cometido por tres o más personas en forma organizada;

3º las víctimas fueren tres o más.”

Art. 11 - Incorpórase como artículo 145 ter del Código Penal, el siguiente:

“Artículo 145 ter.- El que ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de dieciocho años de edad, con fines de explotación, será reprimido con prisión de 4 a 10 años.

La pena será de 6 a 15 años de prisión cuando la víctima fuere menor de trece años.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la pena será de 10 a 15 años de prisión, cuando:

1º mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima;

2º el autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;

3º el hecho fuere cometido por tres o más personas en forma organizada;

4º las víctimas fueren tres o más.”

Art. 12.- Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal, por el siguiente:

“Artículo 41 ter.- Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento.

En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de ocho (8) a quince (15) años.

Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes identifiquen.”

Art. 13 - Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:

“e) los previstos por los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212 y 213 bis del Código Penal.”

Art. 14 – Serán aplicables las disposiciones de los artículos 132 bis, 250 bis y 250 ter del Código Procesal Penal de la Nación.

Art. 15 - Sustitúyese el artículo 119 de la ley 25.871, por el siguiente:

“Artículo 119.- Será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 8 años el que realice las conductas descriptas en el presente capítulo empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la necesidad o inexperiencia de la víctima.”

Art. 16 - Sustitúyese el artículo 121 de la ley 25.871, por el siguiente:

“Artículo 121.- Las penas establecidas en el presente capítulo se agravarán de 5 a 15 años cuando se hubiere puesto en peligro la vida,

la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de 8 a 20 años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero”.

Art. 17 - Deróganse los artículos 127 bis y 127 ter del Código Penal.

## TÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES

Art. 18 - Presupuesto. El Presupuesto General de la Nación incluirá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

Art. 19 - Reglamentación. Esta Ley será reglamentada en un plazo máximo de sesenta días contados a partir de su promulgación.

Art. 20 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del H. Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2006.-

Vilma L. Ibarra - Maurice F. Closs – Ricardo Gómez Díez – Luis Naidenoff – Ernesto R. Sanz – Rubén H. Giustiniani – Miguel A. Pichetto – Mabel L. Caparrós - María C. Perceval -

## FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El delito de la trata de personas ya fue motivo de preocupación del legislador varios años antes de que fuera sancionado el Código Penal que nos rige; en efecto, los antecedentes legislativos en la materia se remontan a las leyes 4.189 del 3 de



agosto de 1903 y 9.143 del 23 de septiembre de 1913 sobre corrupción de menores.

Desde la sanción del Código Penal, el delito de trata de personas ha sido objeto de reformas, siendo la redacción actual la dispuesta por la ley 25.087 y contenida en los artículos 127 bis y 127 ter que lo tipifican de la siguiente forma: “ARTICULO 127 bis.- El que promoviére o facilitare la entrada o salida del país de menores de 18 años para que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuere menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de prisión o reclusión de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de su educación o guarda”; “ARTICULO 127 ter.- El que promoviére o facilitare la entrada o salida del país de una persona mayor de 18 años para que ejerza la prostitución mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años.”

Sebastián Soler, respecto de esta figura, destacaba que la incriminación de este hecho estuvo precedida por un amplio movimiento internacional. El hecho consiste en promover o facilitar la entrada o salida del país de personas con el fin de que ejerzan la prostitución. Es decir, el fin inmediato es lograr la entrada o salida del país. Se trata de una figura de resultado anticipado, ya que la consumación se da con el logro de la salida o entrada, siendo indiferente lo que ocurra después; basta que se produzca la salida o entrada y que el sujeto que la ha promovido o facilitado haya tenido en su ánimo el fin de destinar a la víctima a la prostitución.

El delito penal en cuestión, por sus especiales características, trasciende las fronteras de los Estados, siendo por ello objeto de un específico tratamiento por parte de la legislación internacional.

Es así como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños -Protocolo de Palermo- que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por Ley 25.632), establece el deber de los Estados de adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito la trata de personas, y de proteger la privacidad y la identidad de las víctimas.

Para ello, debe tenerse en consideración lo prescripto por el artículo 3º de citado Protocolo que establece: “por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, es decir, la finalidad de no se limita a la prostitución sino que se ve ampliada a otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud, servidumbre y la extracción de órganos”, comprendiendo de este modo todas las formas de tratamiento de la persona que conllevan el aniquilamiento de su dignidad y personalidad, cosificando de esta manera a las víctimas.

En la presente iniciativa se receptan estas finalidades, se actualizan los tipos penales en consonancia con la preocupación en el

orden internacional, diferenciando la trata de menores y mayores, a fin de consolidar una mayor protección legal para el caso de los primeros por ser las personas expuestas al mayor grado de vulnerabilidad.

Es así como la regulación es diversa en los tipos penales según que la víctima fuese mayor o menor de 18 años de edad, y dentro de esta última franja, se agrava especialmente la pena en el caso de que ellas tengan menos de 13 años de edad, criterio que ratifica la previsión contenida en el artículo 127 bis del Código Penal en su redacción actual.

En este sentido, el Protocolo de Palermo establece en su artículo 3º, inciso c, que “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; y en el inciso d, prevé que “por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años.”

En otras palabras, la consumación del delito de trata de menores de 18 años no requiere el empleo de los medios comisivos (amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios), y si ellos se verificasen, constituirán una figura agravada.

Así, la consumación del delito de trata de menores se produce por el mero ofrecimiento, captación, transporte o traslado con la finalidad de someterlo a cualquiera de las situaciones previstas anteriormente.

La acción típica incluida en el delito de trata de menores -“el que ofrezca”- encuentra justificación en virtud del art. 3, inc. 1, a), del

Protocolo Relativo a la Venta de Niños, Prostitución Infantil y Utilización de Niños en Pornografía (Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente: a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2: i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: a. Explotación sexual del niño; b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño; c. Trabajo forzoso del niño).

El otro gran objetivo del proyecto es –como su nombre lo indica- el de garantizar la asistencia a las víctimas e impedir toda práctica que provoque que las mismas sean tratadas como infractoras. Es por ello que el artículo 5º del dictamen establece el principio de la no punibilidad de las víctimas por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata, y asimismo, establece que no les serán aplicables las sanciones o impedimentos contenidos en la legislación migratoria.

En el Título II se prevé un catálogo de derechos, enumeración que no debe considerarse taxativa, sino meramente enunciativa, ya que asistirán a las víctimas todos los derechos de los que goza la población en general, más los especiales previstos en razón de su particular condición en cuanto víctimas de un delito de características muy peculiares. Asimismo, se prohíbe expresamente el alojamiento en determinados lugares de detención, y se garantiza su privacidad y la reserva de su identidad.

También, y siempre en resguardo de la protección de las víctimas, en el Título III se declaran aplicables las normas de tratamiento especial para la recepción de declaración, contenidas en los artículos 250 bis y 250 ter del Código Procesal Penal de la Nación,

y las previsiones del art. 132 bis posibilitando la actuación de los magistrados inclusive en extraña jurisdicción para la realización de diligencias.

El dictamen que ha producido esta comisión es el fruto de un prolongado trabajo que se desarrolló con la participación de diversas entidades civiles y organismos oficiales.

De las reuniones de comisión surgió la preocupación por elaborar una herramienta legal útil para prevenir y sancionar la trata de personas, y proteger a sus víctimas. En esta inteligencia se consideró que las normas vigentes del Código Penal han quedado desactualizadas frente a las peculiares características que asume esta clase de delito, por lo general cometido por organizaciones criminales que trascienden las fronteras de los países.

Finalmente, deseo destacar que el proyecto de ley que el dictamen aconseja aprobar ha contado con la invalorable colaboración de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y del Interior que han trabajado en esta temática con personal especializado y aportaron experiencia, elementos técnicos e ideas que enriquecieron el debate que ha permitido la elaboración de este dictamen.

Vilma L. Ibarra - Ricardo Gómez Díez – Luis Naidenoff – Ernesto R. Sanz – Rubén H. Giustiniani – Miguel A. Pichetto – Mabel L. Caparrós - María C. Perceval -

## ANTECEDENTES

### I

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

ARTÍCULO 1.º – Incorpóranse a la Ley 11179 –Código Penal de la Nación– los artículos 149 quater, 149 quinquies, 149 sexies, 149 septies y 149 octies, con la siguiente redacción:

Artículo 149 quater – Será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años el que entregare o recibiere un menor como parte de una transacción que tenga por objeto su transferencia a cambio de una remuneración o de cualquier otra retribución.

Artículo 149 quinquies – Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de las conductas descriptas en el artículo precedente.

Artículo 149 sexies – El máximo y el mínimo de las penas establecidas en los artículos 149 quater y 149 quinquies serán aumentados en un tercio si la transacción se hiciere con los fines de:

- a. Explotación sexual del niño;
- b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño;
- c. Trabajo forzoso del niño.

Artículo 149 septies – El máximo y el mínimo de las penas establecidas en los artículos 149 quater y 149 quinquies serán aumentados en un medio si cualquiera de las conductas descriptas en ellos fuera perpetrada por un progenitor, hermano, tutor, persona conviviente o encargada de la educación o guarda del menor.

Artículo 149 octies – Será reprimido con las penas establecidas en los artículos 149 quater y 149 quinquies y sufrirá, además, inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional de la salud que cometiere alguna de las conductas previstas en esos artículos.

ARTÍCULO 2.º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis A. Falcó.-

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley viene a adecuar la legislación penal argentina a lo estatuido por la Convención sobre los Derechos el Niño (aprobada por la comunidad internacional en 1989 e incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994) y, muy especialmente, a lo dispuesto por el Protocolo Facultativo de la Convención en lo que respecta a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

Estos documentos, sancionados y reconocidos internacionalmente, fueron concebidos con la intención de que los estados nacionales trabajen en conjunto para luchar contra los males más tremendos que, lamentablemente, azotan a la niñez en todo el planeta.

La venta de niños como esclavos laborales, sexuales o para conformar “nuevas” familias al margen de las leyes de adopción e importando, obviamente, la supresión de identidad, es una de las acciones delictivas más aberrantes que padecen los menores a manos de adultos inescrupulosos.

Nuestra legislación penal no ha hecho lugar hasta el momento a la figura de la compra-venta de niños ni, consecuentemente, al tráfico ilegal de menores.

En este contexto, vale la pena recordar que la Argentina firmó el 1 de abril de 2002 el mencionado Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y lo ratificó el 25 de septiembre de 2003.

Este protocolo define como de “especial importancia” al hecho de que cada país signatario penalice las infracciones graves contra los derechos de la infancia, sobre todo la trata de niños, la adopción ilegal, la prostitución del menor y la utilización de niños en la pornografía.

Es por ello que esta ley fija penas rigurosas de reclusión (5 a 15 años) a quien “entregare o recibiere a un menor como parte de una transacción que tenga por objeto su transferencia a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución”, y establece, además, que quien “facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare” en ese tipo de transacciones o transferencias, también será punible (3 a 10 años de reclusión).

Por otra parte, esta norma agrava la pena en un tercio para los casos en que quedare demostrado que tal transacción se hubiera llevado a cabo con los fines perfectamente estipulados en el inciso 1 del artículo 3.º del Protocolo que, enhorabuena, ha firmado la Argentina. Ese inciso dispone que:

Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente:

Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de:

a. Explotación sexual del niño;



- b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño;
- c. Trabajo forzoso del niño.

Para el caso en que estas conductas delictivas fueran perpetradas por los progenitores, hermanos, tutores, personas convivientes o encargadas de la educación o guarda del menor, el texto normativo que propongo prevé que el mínimo de las penas establecidas sea aumentado en un medio.

La terminología empleada en este proyecto de ley para la definición de 'menor' o 'niño' se ajusta taxativamente a lo establecido por la Convención y el Protocolo mencionados, entendiendo por tal a "todo ser humano menor de 18 años de edad" al que se le reconocen derechos universales inalienables.

Respetando de modo especialísimo esta terminología no hago más que cumplir con la necesidad de adecuar nuestra legislación a la exigencia de los más prestigiosos tratadistas del mundo que participaron activamente en la redacción final de los documentos internacionales citados, que constituyen la más moderna y sistemática compilación de los derechos universales del niño.

La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los diversos protocolos facultativos implica para los países firmantes la obligación de armonizar su legislación nacional con las provisiones del tratado. De esta manera, los derechos de la infancia no son ya una mera aspiración programática sino un deber de acción estatal a implementar de manera concreta y perentoria.

Me preocupa sobremanera la creciente trata internacional de menores con fines de explotación sexual, de lucro a través de las venta de sus órganos o de esclavización laboral. Es bien sabido que nuestro país no solo no es ajeno a este repugnante tráfico sino que, primordialmente, forma parte de él en calidad de 'proveedor'. Por ello creo que es impostergable la inclusión de esta temática específica en el Código Penal de la Nación Argentina a fin de castigar estos delitos en defensa de los derechos de nuestros niños.

Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen esta iniciativa con su aprobación.

Luis A. Falcó.-

## II

### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...



# LEY DE REPRESIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS

## CAPÍTULO I.-

### Principios Generales

#### Artículo 1º.-

Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte y/o el traslado –ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero-; la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Cuando se tratare de un menor de 18 años, se entenderá que existe “trata de personas” aun cuando no se haya recurrido a los medios comisivos mencionados en el párrafo precedente.

#### Art. 2º.-

Se entenderá por “explotación”, cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) Mantener a una persona en condición de esclavitud;
- b) Someter a una persona a prácticas análogas a la esclavitud;
- c) Obligar a una persona a que proporcione trabajos o servicios forzados;
- d) Mantener a una persona en condición de servidumbre;
- e) Promover, facilitar, desarrollar u obtener provecho de cualquier forma de comercio sexual.
- f) La extracción ilícita de órganos humanos.

#### Art. 3º.-

Cuando se acredite alguna de las situaciones descriptas en el artículo 1º, el consentimiento otorgado por la víctima no se tendrá en cuenta cuando se hubiera recurrido a cualquiera de los medios allí enunciados.

#### Art. 4º.-

Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito relacionado con la migración, la prostitución o cualquier otro delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.

Tampoco le serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que la damnificara.

## CAPÍTULO II.-

### Régimen penal de la trata de personas

#### Art. 5º.-

El que capte, transporte y/o traslade –ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero-; acoja o reciba personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, será reprimido con prisión de 4 a 10 años.

#### Art. 6º.-

En los supuestos del artículo anterior la pena será de 5 a 12 años de prisión cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias:

- a) la víctima fuera inmadura psicológicamente o padeciera trastornos mentales.
- b) las víctimas fueran tres o más personas.
- c) en la comisión del delito concurrieren tres o más personas.
- d) la comisión del delito pusiera en riesgo la salud física de la víctima.
- e) el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda.
- f) el autor fuere un funcionario público.

#### Art. 7º.-

El que ofrezca, capte, transporte y/o traslade –desde o hacia el extranjero o dentro del territorio nacional-, acoja o reciba menores de 18 años, con fines de explotación será reprimido con prisión de 5 a 12 años.

Si para ello recurriera a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, la pena será de 6 a 15 años de prisión.

La pena será de prisión de 8 a 20 años, si concurrieren las circunstancias de los incisos b), c), d), e) o f) del artículo 6.

#### Art. 8º.-

Cuando se hiciere de la trata de personas, en cualquiera de sus modalidades, una actividad habitual la pena será de 8 a 20 años de prisión.

Con idéntica pena será reprimido el que organizare la trata de personas y/o realizare aportes económicos destinados a su organización.

Art. 9º.-

Si la comisión del delito provocare a la víctima un deterioro de su salud física, se incrementará en un tercio el mínimo de la escala penal aplicable al caso.

Art. 10.-

Será reprimido con prisión de 3 a 8 años, el que actuando o pretendiendo actuar como empleador, gerente, supervisor, contratista o agente de empleo, a sabiendas obtenga, destruya, oculte, retire, decomise o posea cualquier pasaporte, documento de migración u otro documento público, verdadero o no, destinado a la acreditación de la identidad de las personas, que pertenezca a otro, con la finalidad de cometer cualquiera de los delitos previstos en la presente ley.

### CAPÍTULO III.-

#### Derechos de las víctimas

Art. 11.-

Desde su primera participación en el proceso, las víctimas de los delitos descriptos en esta ley tendrán los siguientes derechos:

- a) A ser informadas sobre sus derechos en un idioma que comprendan.
- b) A que se les proporcione alojamiento apropiado, alimentación y facilite su higiene personal y a contar con asistencia psicológica, médica y jurídica, oportunidades de empleo, educación y capacitación.
- c) A permanecer en el país, si es su deseo -en las condiciones previstas por la ley respectiva- y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia, al menos mientras dure el proceso penal.
- d) A que se facilite el retorno al lugar en el que estuviere asentado su domicilio.

El acceso a los recursos estatales de asistencia por parte de las víctimas, en todos los casos, será voluntario.

En ningún caso se alojará a las víctimas de los delitos contemplados en la presente ley en cárceles, establecimientos penitenciarios o destinados al alojamiento de personas procesadas o condenadas.

Art. 12.-

En aquellos casos en los que las características del testimonio de la víctima pudiera suponer un riesgo para sí o para su familia, podrá disponerse su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos en las condiciones que señala la ley 25.764.

Art. 13.-

Los funcionarios que intervengan en la investigación, juzgamiento y asistencia de víctimas de los delitos descriptos en esta ley, deberán asegurar la reserva en relación con la identidad de las víctimas.

En ningún caso se procederá a la inscripción de las víctimas – en tal carácter - en registro especial alguno.

Art.14.-

Es obligación de los representantes diplomáticos y consulares de la Nación en el extranjero, proveer a la asistencia de los ciudadanos argentinos que se hallaren en el extranjero y que resultaren víctimas de los delitos descriptos en la presente ley y facilitar su retorno –de ser su voluntad- al territorio argentino.

CAPÍTULO IV.-

Creación del Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas

Art. 15.-

Créase el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social en coordinación intersectorial con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Art. 16.-

Son objetivos del Programa:

- a) Prevenir la trata de personas.
- b) Garantizar el respeto, protección y ejercicio de los derechos humanos a las víctimas de la trata de personas.
- c) Asegurar el acceso de las víctimas a servicios gratuitos de asistencia médica, psicológica, social y jurídica.
- d) Promover la coordinación intersectorial y proponer protocolos de trabajo interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la prevención, la asistencia y la reinserción social de las personas que sufren los efectos de la trata de personas.
- e) Informar, sensibilizar y capacitar, con perspectiva de género y de los derechos humanos, sobre los conceptos fundamentales de la trata de personas y los acuerdos e instrumentos internacionales relacionados con ella.
- f) Promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación entre organismos e instituciones estatales y Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres y los niños.

Art. 17.-

Son deberes del Programa:

- a) Intervenir en la asistencia a las víctimas de la trata de personas.
- b) Diseñar y encarar la ejecución de las políticas públicas necesarias para asegurar la protección y el cuidado a las víctimas de la trata de personas.
- c) Relevar los recursos públicos y privados disponibles para la prevención y asistencia de las víctimas de la trata de personas promoviendo un accionar coordinado de los mismos.
- d) Establecer mecanismos de cooperación entre organismos públicos y privados de investigación y documentación, con el fin de recopilar y publicar periódicamente los datos estadísticos sobre la trata de personas.
- e) Elaborar programas y campañas de concientización pública destinados a informar sobre la trata de personas y prevenir su desarrollo.

Art. 18.-

El Ministerio de Desarrollo Social será la autoridad de aplicación del Programa y en tal carácter coordinará con las Provincias las acciones previstas en la norma.

Art. 19.-

Los gastos que demande el cumplimiento del Programa se imputarán al Ministerio de Desarrollo Social en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

Art. 20.-

El Poder Ejecutivo reglamentará, en un plazo máximo de 60 días, la composición y funcionamiento del Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas, creado en el Artículo 15 de la presente Ley.

## CAPÍTULO V

### Disposiciones especiales

Art. 21.-

Sustitúyese el artículo 121 de la Ley 25.871, por el siguiente:

Artículo 121.- Las penas establecidas en el artículo anterior se agravarán de CINCO (5) a QUINCE (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de OCHO (8) a VEINTE (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero.

Art. 22.-

Deróganse los artículos 127 bis y 127 ter del Código Penal.

Art. 23.-

La investigación y juzgamiento de los delitos previstos en la presente ley será de competencia de la justicia federal en todo el país.

Art. 24.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Jorge A. Agúndez.

## FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Señor Presidente:

El presente proyecto de ley y la fundamentación que acompaño tienen su origen en el expediente O.V. 230/05 presentado por el señor Procurador General de la Nación que hago propios.

## ANTECEDENTES

El presente proyecto de ley tiene como propósito establecer una base legal adecuada para una más eficiente lucha contra la trata de personas, sea ésta interna o internacional, asegurando una persecución eficaz y protegiendo a las víctimas las que, en su inmensa mayoría, son mujeres y niños.

Lejos de constituir una situación accidental o temporaria, la trata de personas -expresión contemporánea de la esclavitud- constituye un problema estructural que se encuentra en expansión y que se ve favorecido por la globalización y las nuevas tecnologías.

Las cifras proporcionadas por diversos organismos internacionales alertan sobre la dimensión de este flagelo. De acuerdo con la UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) esta actividad afecta a cuatro millones de mujeres y niñas en todo el mundo; según la Unión Europea a quinientas mil.

Conforme el segundo Informe sobre trabajo forzoso del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) publicado en 2005, “Una Alianza Global contra el Trabajo Forzoso”, Latinoamérica y el Caribe cuentan con 1.320.000 víctimas del trabajo forzoso, de las cuales 118.800 –con una participación altísima de mujeres y niñas- lo son de explotación sexual comercial.

Para la OIT entre el 40 y 50 por ciento de las víctimas de trabajo forzoso son niños menores de 18 años. Según Naciones Unidas a su alrededor se movilizan diez mil millones de dólares al año. El informe de la OIT extiende esta cifra hasta los 32 mil millones, en cuya integración la explotación forzosa del comercio sexual representa más del 85 por ciento.



Según el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre tráfico de personas (Trafficking in Persons Report), 800.000 víctimas son anualmente traficadas y de ellas 80 % son mujeres y la mitad son niños.

La trata de seres humanos representa la negación de prácticamente todos los derechos humanos: el derecho a la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad de circulación, el derecho a fundar un hogar y una familia, el derecho al mayor nivel posible de salud y el derecho a la educación.

Mediante la palabra “trata” –término oficial utilizado por las Naciones Unidas- se hace referencia al comercio de seres humanos ya sea hombres, mujeres o niños con fines de explotación.

En general, la trata de seres humanos suele implicar -además de la explotación sexual- una gran variedad de actividades delictivas que incluyen el secuestro, la violencia psicológica, la violación, la reducción a la servidumbre y la privación de la libertad. La trata de personas no se limita a la industria sexual. Este creciente delito abarca también el trabajo forzado y supone infracciones importantes de las normas laborales, la salud pública y los derechos humanos.

Esta problemática se ha constituido en un tema de creciente interés para la comunidad internacional que ha venido considerando la trata de personas como una violación grave de los derechos humanos. El mundo ha condenado progresivamente con mayor énfasis la esclavitud y la servidumbre involuntaria, la violencia contra las mujeres y otros elementos de la trata, mediante declaraciones, tratados y resoluciones e informes de carácter universal y regional y cada vez es más extenso el consenso en batallar por su eliminación.

Entre los numerosos instrumentos que reflejan tal compromiso se cuentan: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Suplementario de 1956 sobre la Abolición de la Esclavitud, del Tráfico de Esclavos, y de las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; la Convención sobre la Abolición del Trabajo Forzado de 1957; el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; el Informe Final del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los niños (Estocolmo, 1996) y el Compromiso adquirido en el Segundo Congreso Mundial (Yokohama, 2000); la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995); el Convenio N° 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999), la

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo.

En nuestro país, mediante la sanción de la Ley 25.632, se aprobó la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional que ha establecido un auténtico y completo programa estatal de prevención y enfrentamiento de la delincuencia involucrada en problemáticas como la de la trata de personas.

La Convención impone el deber de prestación de asistencia y protección a las víctimas, en particular en casos de represalia o intimidación y la designación de procedimientos para que sean consideradas sus opiniones y se les proporcione una indemnización.

En el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención se establece, además del deber de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno la trata de personas, el deber de proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de estos delitos y el de aplicar medidas dirigidas a su recuperación física, psicológica y social –incluso en cooperación con organizaciones no gubernamentales- a través del suministro de alojamiento adecuado, asesoramiento e información, asistencia médica, psicológica y material y el otorgamiento de oportunidades de empleo, educación y capacitación.

Pese a ello, la visualización de la existencia de organizaciones delictivas que lucran con el sometimiento de las personas y la asistencia a las víctimas es una tarea que, el mundo en general y nuestro país en particular, aun no ha encarado seriamente.

Los casos, contados, aislados y excepcionales, en los que se ha investigado este delito han revelado con crudeza en nuestro país la ausencia de recursos establecidos para tratar, en tiempo y forma, las consecuencias que siguen al desbaratamiento de una organización criminal.

Suele suceder que la trata de personas se considera, aún, un problema menos grave que, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes.

Para evitarlo, es necesario, como ya se ha planteado en otros países, reconocer a las víctimas de trata de personas como víctimas de una actividad criminal diseñada con el fin de obtener beneficios a partir de su mantenimiento en una situación de servidumbre. Se trata de situaciones en las que el consentimiento proporcionado por la víctima carece de relevancia en atención al condicionamiento del que es objeto su voluntad.

Es importante insistir en esta definición por cuanto uno de los motivos que impide la adecuada comprensión del fenómeno de la trata de



personas, parte del hecho de dar por sentado que la víctima consiente el trato del que es objeto.

Ligado a esta problemática aparece el tráfico de personas, fenómeno que, por sí mismo, puede aumentar el riesgo de trata.

Los migrantes que recurren a los servicios de traficantes pueden encontrarse en una posición extremadamente vulnerable a causa de su situación irregular o porque pueden haber contraído deudas en sus países de origen o debido a la impunidad con la que suelen operar las redes de tráfico. En ocasiones, el hecho de ser indocumentados los expone a sufrir cambios en los contratos o a ser obligados a realizar trabajos degradantes y humillantes, con frecuencia en condiciones equivalentes a la esclavitud. En consecuencia, pasan de ser migrantes irregulares a ser víctimas de la trata.

Por otra parte, la problemática que da sustento a este proyecto afecta particularmente a los niños. En este caso, el carácter transnacional de algunas formas de explotación sexual comercial que los afecta, tales como el turismo sexual y la pornografía infantil, transforma los marcos normativos nacionales en un mecanismo indispensable para su prevención.

Los instrumentos internacionales en la materia imponen la obligación de procurar su prevención y represión.

La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a adoptar medidas para evitar el tráfico de niños y garantizar su protección contra todas las formas de explotación sexual promoviendo su recuperación psíquica y psicológica y su reintegración social. En tanto que su Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, aprobado por nuestro país mediante la ley 25.763, especifica las medidas a adoptar para prevenir y reprimir estos delitos.

Por su parte, la Convención N° 182 de la OIT especifica que los Estados Partes adoptarán medidas inmediatas y efectivas para asegurar la prohibición y eliminación del tráfico de niños y que adoptarán las medidas necesarias y la asistencia directa pertinente para el retiro de niños en situación de explotación sexual, su rehabilitación y su integración social.

Estos compromisos deben traducirse en mecanismos encaminados a confirmar el derrotero iniciado por el estado nacional a partir de las obligaciones asumidas internacionalmente, procurando proporcionar una fuerte señal desde el ámbito normativo dirigida a prevenir la explotación sexual de los niños de forma directa mediante su prohibición, represión y sanción.

En nuestro país, la legislación vigente no resulta adecuada para desalentar la trata de personas y enjuiciar a los delincuentes, dado que no refleja la gravedad de los delitos en cuestión. No existe ninguna ley general que reprima la serie de conductas involucradas en la trata de personas. En su lugar, aún los casos más brutales de la industria sexual, suelen ser castigados conforme a leyes que también se aplican a delitos menores.

De ahí que la sanción del presente proyecto represente un enorme paso adelante en la visualización y persecución del fenómeno de la trata de personas en tanto no se detiene en establecer con precisión y alcance adecuado la reprochabilidad de las conductas descriptas sino que, además, impone la elaboración de un extenso programa estatal de atención a las víctimas.

Con esta propuesta, se procura evitar una visión sesgada de la problemática aceptando que la trata de seres humanos es una cuestión sin adecuado abordaje en nuestro país y que todas las agencias del estado se encuentran dispuestas a hacerle frente. Se pretende impedir que la trata sea vista como otra forma de migración indocumentada que se resuelve encarcelando a las víctimas por violaciones inmigratorias o de trabajo y expulsándolas. También se pretende evitar que, como ocurre en otros países, las víctimas sean tratadas como <<testigos desechables>> y expulsadas luego de que la justicia deja de requerirlas.

En este proyecto se procura perfeccionar la respuesta penal frente a las nuevas formas de delincuencia que sacan provecho del fenómeno de la trata para cometer sus delitos, armonizando su redacción con los lineamientos generales proporcionados por el Código Penal.

La legislación comparada de sanción más reciente (ley 11.106/05 de la República de Brasil, decreto N° 14-2005 sancionado por el Congreso de la República de Guatemala, regulación N° 2001/4 sobre la prohibición del tráfico de personas en Kosovo emanada del Representante Especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, ley orgánica 11/2003 del Reino de España, ley de 28.251/04 de la República de Perú, ley 747/00 de la República de Colombia y Ley de Protección de Víctimas del Tráfico de Seres Humanos y la Violencia 2000 de Estados Unidos de Norteamérica) ha servido de base para este proyecto.

Para abordar la problemática en su conjunto ha resultado necesario prever expresamente los derechos de las víctimas de trata complementándolos con la creación del “Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas” de modo de asegurar el efectivo ejercicio de los derechos aquí consagrados.

Tanto los derechos de las víctimas aquí reconocidos como la creación del Programa se hallan en línea con las disposiciones contenidas en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

## CAPÍTULO I. Principios Generales

El Capítulo I.- contiene aquellas definiciones que ostentan el carácter de directrices y que proveen los lineamientos generales de interpretación de las estipulaciones contenidas en el Capítulo II.-

La definición de “trata de personas” es aquella que proporciona el artículo 3 a) del Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

La exclusión de la acreditación del medio comisivo, cuando se trate de menores de 18 años –segundo párrafo del artículo 1º del proyecto- es consecuencia de las definiciones establecidas en los incisos c) y d) del artículo 3 del Protocolo.

La definición de explotación, establecida en el artículo 2 del proyecto, halla fundamento, también, en la descripción efectuada en el inciso a) del artículo 3 del Protocolo.

Del mismo modo, la exclusión de la consideración del consentimiento proporcionado por la víctima a toda forma de explotación cuando se empleen los medios comisivos descriptos en la definición de la trata de personas, guarda directa relación con la estipulación contenida en el artículo 3 inciso b) del Protocolo.

La necesidad de evitar la penalización de las víctimas de trata es reconocida por la Ley de Protección de Víctimas del Tráfico de Seres Humanos y la Violencia 2000 de Estados Unidos de Norteamérica y por la Regulación Nº 2001/4 de la Secretaría General de la ONU sobre la prohibición del tráfico de personas en Kosovo y resulta imprescindible dado que se parte del presupuesto de que la trata de personas supone fuerza, coacción, engaño y otros medios similares para obtener o conservar la labor o los servicios de las víctimas.

Además, resulta congruente con la categorización como víctima de la persona que es objeto de trata, lo que determina que no pueda ser penalizada por delitos contra el orden migratorio, los relacionados con el ejercicio de la prostitución u otros delitos conexos como el comercio de estupefacientes o cualquier aporte secundario a la actividad desarrollada por una organización criminal. Esta vía se presenta como una excepción y su utilización quedará sometida al condicionamiento

que supone el estricto control judicial, lo que neutralizará el peligro de una eventual manipulación.

## CAPÍTULO II. Régimen Penal de la Trata

El artículo 5 describe la figura básica de la trata de personas a partir de la definición proporcionada por el Protocolo.

En los incisos a), c), e) y f) del artículo 6 se contemplan las agravantes relacionadas con la situación de mayor indefensión de la víctima.

El inciso b) agrava la pena no sólo por tratarse de una mayor cantidad de afectados sino, porque ello revela, además, que se está en presencia de una organización criminal más compleja o con mayores posibilidades de desplegar su accionar.

El inciso d) del artículo 6 prevé el empleo de la escala penal agravada en función del mayor reproche al que se hace acreedor quien expone la salud física de la víctima a un riesgo concreto mayor respecto del que supone la propia comisión del delito.

El artículo 7 se refiere específicamente a aquellos casos en que las víctimas sean menores de 18 años de edad. La mayor vulnerabilidad de los niños exige una mayor protección a su respecto, por lo que se entiende que el incremento de la punición guarda relación, además, con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la materia.

El primer párrafo de este artículo describe la misma conducta contenida en el artículo 5 con el detalle de que se ha eliminado la exigencia de la acreditación de algunos de los medios comisivos que allí se señalan, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 3, inciso c) del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.

La inclusión de la oferta como acción típica recoge el mandato impuesto por el artículo 3, inciso 1.a) del Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía que complementa la Convención sobre los Derechos del Niño. La entrega o aceptación de un niño con fines de explotación -previstas en este Protocolo como actos que deben quedar alcanzados por la legislación penal- se encuentran abarcadas por las acciones de transporte y/o traslado (en el caso de la entrega) y acogimiento o recepción (en el caso de la aceptación) establecidas en la norma propuesta.

La mayor vulnerabilidad, a la que ya se hizo referencia, otorga fundamento al agravamiento de las penas cuando se configura íntegramente el tipo básico descrito en el artículo 5 pero en relación con un niño -segundo párrafo- o cuando se acredita la concurrencia de

las agravantes previstas en el artículo 6 -tercer párrafo-.

La complejidad de la organización delictiva que adopta la trata de personas como una actividad habitual, y el consiguiente daño social que de ello se deriva, otorgan fundamento al incremento de la escala penal establecido en el primer párrafo del artículo 8.

La escala penal establecida para la conducta descrita en el segundo párrafo del artículo 8 tiene fundamento en el reproche social al que son acreedores quienes consideran la trata de personas como un destino para la inversión de sus activos financieros o quienes asumen la decisión de gerenciar o administrar esta actividad delictiva.

A diferencia de la previsión del artículo 6, inciso d), en el artículo 9 se incrementa la punición cuando se acredite la existencia de un deterioro efectivo en la salud física de la víctima como consecuencia de la comisión del delito.

Por su parte, el artículo 10 recepta una disposición contenida en la Ley de Protección de Víctimas del Tráfico de Seres Humanos y la Violencia 2000, de Estados Unidos de Norteamérica, que resultará de utilidad para combatir la trata de personas, en tanto contempla una situación en la que se posibilita el dominio de la voluntad de la víctima, mediante la amenaza de la revelación a las autoridades públicas del carácter irregular de su permanencia en el país, o la supuesta denuncia de su condición de “indocumentada”.

### CAPÍTULO III. Derechos de las Víctimas

Mediante el artículo 11 se establece el catálogo de los derechos de las víctimas de trata.

La provisión de un alojamiento, la consideración de un eventual reintegro a los lugares de origen, la prevención de una eventual revictimización y el suministro de información sobre sus derechos y el desarrollo del proceso, son actividades que deben ser encaradas desde un primer momento.

En muchas oportunidades las víctimas son extranjeras, en cuyo caso, deberán ser mayores las consideraciones por cuanto el desconocimiento de la lengua y de las prácticas culturales locales supone mayores dificultades en la relación entre la víctima y la administración de justicia.

El derecho a permanecer en el país, si es su deseo, previsto por el inciso c) de este artículo, responde a la mayor vulnerabilidad que caracteriza a estas víctimas (ignorantes del idioma o la cultura del país, de los procedimientos judiciales y de los servicios a los que pueden recurrir).

La posibilidad de que sean expulsadas del país suele impedir que las víctimas procuren ayuda de los organismos estatales. De allí entonces que resulte trascendente advertir tales circunstancias para permitir un desarrollo más eficaz de las investigaciones.

El artículo 12 establece expresamente la posibilidad de que la víctima que se encuentre en situación de riesgo a partir del testimonio brindado, sea incorporada al Programa Nacional de Protección de Testigos creado por la ley 25.764.

La disposición del artículo 13 se encuentra en línea con las obligaciones establecidas por la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo complementario.

La obligación contenida en el artículo 14 involucra una mayor precisión sobre el alcance de las prácticas consulares en la materia y responde a las directivas contenidas en el Protocolo.

#### CAPÍTULO IV. Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas

La creación del Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con otras áreas del estado, consagra la importancia de la cooperación entre todos los niveles y ramas del gobierno.

La intervención de las distintas agencias estatales propicia la consagración de un compromiso firme dirigido a instalar la problemática de la trata de personas, su prevención y su represión, en un lugar preponderante de la agenda social.

En la elaboración de esta propuesta se ha tomado como referencia el proyecto de ley de autoría de la Dip. Nacional María Elena Barbagelata relativo a la constitución del Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas y Explotación Sexual (Expte. N° 647-D-04).

#### CAPÍTULO V. Disposiciones especiales

A fin de armonizar estas normas con el ordenamiento represivo vigente, se propicia la sustitución y derogación de diversas normas.

Mediante el artículo 21 se consagra una nueva redacción al artículo 121 de la Ley de Migraciones (25.871) de manera de evitar la colisión de esa norma con las contenidas en el Capítulo II del presente proyecto.



Por idéntico motivo, a través del artículo 22, se dispone la derogación de los artículos 127 bis y 127 ter del Código Penal.

Finalmente, a través de la disposición contenida en el artículo 23, se otorga competencia a la justicia federal en lo atinente a la persecución y juzgamiento de estos delitos en razón del menoscabo a la seguridad de la Nación que produce el fenómeno delictivo de la trata de personas.

La complejidad de la organización delictiva abocada a la comisión de este tipo de delitos, la circunstancia de que se desarrolle sin fronteras y el hecho de que pueda afectar la seguridad e intereses de la Nación, justifican que se atribuya competencia en la investigación y juzgamiento de esta categoría de delitos a la justicia de excepción.

Por los fundamentos que se acompañan y se comparten pido la aprobación del presente proyecto de ley.

Jorge A. Agúndez.

III

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 127 del Código Penal de la Nación, como sigue:

"Artículo 127: Será reprimido con prisión de tres a seis años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, mediando engaño, abuso, coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción.

Será reprimido con prisión de uno a tres años quien, mediando o no las circunstancias del párrafo anterior, ejerciere la prostitución en la vía pública y/o en cualquier otra clase de espacio público."

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Miguel A. Pichetto.

## FUNDAMENTOS:

Señor Presidente:

El presente es reproducción del proyecto de mi autoría S\_629/03.

El objeto de la presente iniciativa es materia sensible, por lo que significa, en los momentos de crisis por los que atravesamos, punir el ejercicio de la prostitución.

Pero, a poco que se examine detenidamente este proyecto, se advertirá que no se trata de una medida punitiva generalizada, sino que apunta, específicamente, al ejercicio de la prostitución en la vía pública y/ o en espacios públicos.

Aquella crisis de la que hablara al comienzo y que conmina a muchas personas, sin exclusión de sexo, a situaciones de extrema necesidad, a punto tal de tener que prostituirse para sobrevivir, no es sinónimo - para muchas otras personas- de situaciones desesperantes, haciendo de la prostitución una profesión habitual, caracterizada por la onerosidad de las relaciones promiscuas que mantienen.

El avance de los tiempos ha sido acompañado por el cambio de ciertos valores sociales, y ha traído aparejado un criterio de normalidad respecto de muchas conductas, que antes se reputaban como impropias y escandalosas.

Hoy en día la aceptación, y la garantía, de la libertad sexual en el sentido más amplio de la palabra, hace que ya no nos extrañemos ante el transexualismo, o ante relaciones de tipo homosexual, admitidas a nivel mundial.

Sin embargo, la comunidad viene observando un fenómeno de desborde de ciertas conductas, que impide conjugar los intereses de los diferentes actores de la sociedad.

A la aceptación, es decir, a la no discriminación de las personas por su condición sexual, se suma, en muchos casos, una falta de correlato en cuanto al respeto que debe tenerse a los derechos de los vecinos.

Son públicas las quejas, no sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de vecinos que están obligados a observar, en las puertas de sus casas o en las adyacencias de su barrio, el ejercicio de la prostitución por heterosexuales, travestis, transexuales y homosexuales, de manera irrestricta, y hasta obscena.

Los medios de comunicación recogen a diario las quejas de esos vecinos, no sólo por el espectáculo, la alteración del orden público y la suciedad que produce esta actividad en la vía pública, hasta ahora legal, sino también por la obligación en que se ven muchos padres, de tener que explicar a sus hijos menores, espectadores habituales e involuntarios del fenómeno, qué es lo que están presenciando, con todas las implicancias que ello tiene, entre las que podemos señalar una muy temprana educación sexual, que, entiendo, es patrimonio



exclusivo, en cuanto a tiempo y espacio, del ámbito familiar, y que muchos padres prefieren se materialice, incluso, a través de la elección de determinados colegios o instituciones de enseñanza.

Como vemos y advertimos a diario, no alcanza con la figura contravencional admitida, por ejemplo, por el Código de Convivencia Urbana, el que en sus artículos 71, 72 y 73, referidos al uso del espacio público, entiende como lesivos el ofrecimiento o demanda de servicios sexuales en espacios públicos, la perturbación del descanso y el ensuciar bienes a través de todas las acciones posibles.

Conductas como las referidas no sólo afectan el uso del espacio público, sino que avanzan sobre la tranquilidad pública, bien jurídico que debe tutelarse –ab initio- desde su mantenimiento, y no desde su simple alteración: el valor tranquilidad pública, que conlleva muchos otros bienes jurídicos en su seno -desde los que nos señalan una medida de moral pública, pasible de lesionarse en su integridad, hasta aquellos que hacen a la seguridad pública- no admite un permisivo quebrantamiento, pues su mantenimiento hace a la defensa de la comunidad como tal, cuyos intereses son superiores a los de cualquier componente de la misma.

Entiendo que si el ejercicio de la prostitución en la vía pública se ha convertido en materia de intranquilidad para el ciudadano común, forzado a aceptar formas de vida que en muchos casos no comparte, y que no sólo lo perjudican en su vida cotidiana, sino también en sus bienes, en la educación de sus hijos, en la deformación de ciertas reglas de convivencia, en su fe, en su seguridad y en la de su familia, y en definitiva, en todo lo que hace a su esencia y a su ser más íntimo y a sus derechos más elementales, debe encontrar un límite, lo suficientemente firme, como para acomodar los intereses en juego.

Pues el bien último a proteger es la sociedad, a través de la tipificación de la conducta sexual disvaliosa.

Nada impide que quienes quieran ejercer la prostitución lo hagan en forma privada y en lugares privados, en beneficio de toda la comunidad, pues lo que aquí se reprocha es, sólo, el ejercicio de la prostitución en la vía pública.

Nuestro país ha progresado mucho en materia de libertades individuales. Sin ir más lejos, los diarios de mayor circulación publican servicios sexuales de manera explícita, muestra de un verdadero y poco ingenuo comercio del sexo, que nada tiene que ver con aquellos avatares de la vida que llevan a las personas al colmo de la humillación sexual para poder subsistir.

Entonces, es hora de restablecer ese delicado equilibrio que debe reinar en toda sociedad, para que sus integrantes encuentren, todos, un ámbito armónico de desarrollo personal, familiar, y social.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la sanción del presente proyecto.

Miguel A. Pichetto.

#### IV

### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

#### DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL.

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el artículo 126 del Código Penal, que fuera modificado por el artículo 7º de la Ley 25.087, por el siguiente texto:

"Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución de mayores de dieciocho años de edad, aún cuando contare con el consentimiento del mayor de edad para ser prostituido ."

ARTICULO 2º - Sustitúyese el artículo 127 del Código Penal, que fuera modificado por el artículo 8º de la Ley 25.087, por el siguiente texto:

"Será reprimido con prisión de tres a seis años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aún cuando contare con el consentimiento del mayor de edad para ser prostituido."

ARTICULO 3º – Sustitúyese el artículo 127 ter incorporado mediante Ley 25.087, por el siguiente:

"El que promoviere o facilitare el reclutamiento, alojamiento, traslado, acogida dentro o fuera del país de una persona mayor de 18 años para que ejerza la prostitución, someterla a esclavitud sexual, pornografía u otras formas de explotación sexual, aún cuando contare con el consentimiento del mayor de edad para ser explotado sexualmente, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años."

ARTICULO 4º - Asistencia a las víctimas

El Ministerio de Justicia conformará un programa de asistencia a las víctimas de explotación sexual, tanto mayores como menores de edad. Los programas deberán prestar especial cuidado en la protección de la identidad y localización de las víctimas para evitar un nuevo reclutamiento y en garantizar la indemnidad de quienes cooperen en el desbaratamiento de redes de tráfico y explotación sexual.

ARTICULO 5º – Sistema de información

Se creará en el ámbito del Ministerio de Justicia un sistema de información que recopile datos cuantitativos y cualitativos sobre las víctimas, los tratantes, los clientes de menores, la localización de las zonas de reclutamiento y toda otra información que pueda ser útil para combatir este delito y asistir a las víctimas.

Se emitirá un informe público semestralmente.

ARTICULO 6º . - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Jorge M. Capitanich.-

## FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La trata de blancas está afincada en la Argentina desde hace más de un siglo. Pero ahora comienza a tener características alarmantes. Desde hace un tiempo a esta parte, en nuestro país se produjeron, en especial en el norte argentino, desapariciones de mujeres nativas y algunas turistas extranjeras. Es de sospechar que muchas han sido secuestradas y puestas a trabajar en condiciones inhumanas.

El tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, ocupa el tercer lugar como actividad lucrativa ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas y el de armas. Se trata de un fenómeno que afecta a todos los países y el traslado siempre se hace desde un país pobre hacia otro más rico. Según estimaciones de Naciones Unidas, el tráfico de personas con fines de explotación sexual mueve cada año entre 5 y 7 billones de dólares. De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, cada año se venden cerca de 4 millones de mujeres con fines de prostitución, esclavitud, matrimonio; en tanto, dos millones de niñas son introducidas en el comercio sexual. Se calcula que entre 45.000 y 50.000 mujeres y niños son trasladados por año sólo a Estados Unidos. El negocio está a cargo de mafias internacionales que operan en los lugares de origen, tránsito y destino de las víctimas.

"La trata ... tiene (...) connotaciones de discriminación. En el caso de la trata con destino al mercado mundial del sexo, estamos hablando de hombres de países relativamente prósperos que pagan los servicios sexuales de mujeres y niñas (y a veces de hombres y niños) procedentes de países menos ricos. Esto no es tan sólo una cuestión de derechos laborales o de desarrollo desigual. Es una cuestión básica de derechos humanos porque tiene que ver con una forma de discriminación muy extendida y muy destructiva". (Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)

Los tratantes utilizan diversos métodos para reclutar a sus víctimas, que van desde el rapto liso y llano a la compra de la persona de manos de su propia familia. Es frecuente que los tratantes realicen

coerción física y actos de violencia e intimidación a las víctimas. Los tratantes rara vez son detenidos y casi nunca procesados. Las penas impuestas por la trata de personas son relativamente leves cuando se las compara con el contrabando de drogas o de armas. En la mayoría de los casos, las víctimas de la trata son consideradas simplemente como delincuentes por las autoridades del Estado receptor y, a menudo, son detenidas, procesadas y deportadas.

En América Latina, el tráfico de niños y mujeres tiene las características del tráfico clásico de mujeres: personas engañadas y obligadas por los traficantes a trabajar en contra de su voluntad y en condiciones de esclavitud. Las bandas organizadas de traficantes cuentan con la impunidad de sus delitos, en algunos casos los denunciantes son asesinados y, en otros, las víctimas son localizadas y reclutadas nuevamente.

En los países en que la prostitución está permitida, muchas de las mujeres son privadas de su documentación. En algunos de estos casos las mujeres ni siquiera hablan el idioma del lugar. No tienen libertad de tránsito y son llevadas del trabajo a los depósitos donde las alojan. Estas mujeres o niñas generan grandes ganancias a los proxenetas. Otras formas de sometimiento es inducir las a la adicción de drogas o alcohol, de modo que el trabajo lo realizan a cambio del consumo hasta el momento que son eliminadas por el deterioro físico e improductividad.

La trata de personas es un tema que ha adquirido dimensiones que exigen acciones inmediatas y coordinadas. Requieren con urgencia ser parte de la agenda nacional e internacional. Esa pandemia social afecta la dignidad y los derechos humanos de las personas. Su naturaleza clandestina alienta el silencio y la impunidad y, por tanto, la hace una tarea difícil, sobre todo al intentar identificar y desarticular esas redes mafiosas.

La distinción entre prostitución “forzada” y “libre” facilita la trata de mujeres y niños, porque permite a los traficantes utilizar el consentimiento de la víctima como defensa en los juicios penales y hace muy difícil para las mujeres, demostrar que ellas fueron forzadas a la prostitución o sexualmente explotadas en contra de su voluntad.

La Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, señala que del análisis de los testimonios recogidos de las mujeres en prostitución, se deduce que muy pocas de ellas realmente eligen esta actividad. Mucha prostitución es mantenida a través de la fuerza premeditada y el abuso físico pero, a menudo, este es el resultado del abuso sexual y emocional previo, privaciones y desventajas económicas, marginalización, pérdida de identidad, reclutadores depredadores, engaños y trampas, manipulación y decepción. La Coalición no duda del hecho de que algunas mujeres lo hayan realmente elegido, pero argumentan que, de la misma manera que

cuando una persona elige tomar drogas peligrosas reconocemos que es dañino, el ejercicio de la prostitución representa un daño a la persona. Aplicando las palabras “forzada” y “libre” a la prostitución, se promueve la visión de la prostitución como un acto individual de una mujer individual y esconden el papel de una enorme industria global, y de las enormes necesidades económicas y sociales que empuja a mujeres y niños a la prostitución.

No existe en las Convenciones de las Naciones Unidas el empleo del término “prostitución forzada”. El artículo 8 de CEDAW, por ejemplo, se refiere a “todas las formas de tráfico de mujeres y explotación de prostitución de mujeres” –no de “prostitución forzada”. ¿Habláramos de esclavitud forzada?”. No, no lo haríamos, simplemente porque el significado de fuerza está inherente en la palabra misma. Igualmente, iría en contra del espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siglos de activismo en derechos humanos, y del intento de muchas Convenciones de las Naciones Unidas y conferencias para restringir la violación de la prostitución a “prostitución forzada”.

A continuación se enumeran los convenios internacionales relacionados específicamente a la problemática tratada, todos ratificados por nuestro país. Ninguno de estos instrumentos legales exige vicios del consentimiento de la víctima para que se configure el delito del tratante:

1. Convención sobre la esclavitud – 1926;
2. Convención contra la Trata de persona y explotación de la prostitución ajena – aprobado en la 264º acción plenaria de la IV Asamblea de las Naciones Unidas por resolución 317 del 02-12-491949. (Dto Ley 11925 A.D.L.A. XVII-A 1957 - ratificado por las leyes Nº 14.467 y Nº 15768. Establece: que la explotación de la prostitución ajena y la trata de personas con esos fines, es incompatible con la dignidad y el valor de la persona humana y... : " Por lo tanto, Las Partes Contratantes convienen por el presente en lo que a continuación se establece: Artículo 1: Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona. Artículo 2: Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena".
3. Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud – 1956;
4. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) - 1979 Esta convención está incluida en la CN, art. 75, inciso 22) Artículo 6 dice: Los estados



partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la mujer. ". El artículo 8, se refiere a "todas las formas de tráfico de mujeres y explotación de prostitución de mujeres" – no de "prostitución forzada".

5. Convención sobre los derechos del niño – 1989;
6. Protocolo facultativo de la convención de los derechos del niño, relativo la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía – 2000;
7. Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que en su art. 6 prohíbe la trata de mujeres;
8. Declaración y plataforma de acción de Beijing (1995);

Por otro lado, la Convención contra el Crimen Organizado y el Protocolo de Palermo, utilizan una definición de trata que no cumple con los objetivos de defensa de la víctima y protección de sus derechos humanos, ni es útil para perseguir el delito dado que pone tres requisitos para que se configure el delito del tratante:

- 1) los vicios de la voluntad de la víctima (engaño, coacción, abuso de una situación de vulnerabilidad etc.) que son requisitos muy difíciles de probar;
- 2) la asociación ilícita (tres o más personas);
- 3) que sea transnacional.

Estos tres requisitos, especialmente el primero, redundan en beneficio de los delincuentes y tratantes. Si bien Argentina firmó estos instrumentos internacionales, la interpretación de los mismos no debe realizarse aisladamente de los demás compromisos asumidos en todos los demás convenios señalados, sino en una interpretación armónica, teniendo en cuenta la tradición abolicionista que nuestro país asumió y mantiene. Por lo cual, habría que tener en cuenta la Convención contra el Crimen Organizado y el Protocolo de Palermo, en la medida que se armonicen con los tratados anteriores y no los contradigan

En síntesis la reforma legal propuesta debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El delito debe configurarse aún cuando el proxeneta cuente con el consentimiento de la víctima. La existencia de engaño, coacción, violencia, abuso de una situación de vulnerabilidad etc., asociación ilícita, y crimen transnacional deben ser agravantes del delito, como lo establecen las reformas a la legislación penal que se vienen consolidando a nivel latinoamericano en los últimos años. Antes de la reforma de 1999 nuestro Código seguía estos lineamientos.
- La definición de trata debe contemplar el reclutamiento, alojamiento, traslado, acogida, dentro o fuera del país, por una o más personas, AUNQUE LA VÍCTIMA DE SU CONSENTIMIENTO ya que el delito depende la conducta del tratante, no de los actos de la víctima. Esta definición se funda en los principios de derechos humanos según el cual no se debe hacer distinción entre víctimas

"inocentes" y víctimas "culpables". O entre las que pueden probar que han sido forzadas y las que no.

- Estas modificaciones Impiden que los traficantes utilicen el consentimiento de la víctima como defensa en los juicios penales para quedar libres y pasar a ser prósperos empresarios de la mal llamada "industria del sexo". La carga de la prueba recae sobre el explotador y no sobre la víctima. En el caso de la explotación de la prostitución ajena, lo que importa es que el fin sea precisamente el de realizar dicha explotación.
- Crear un sistema de información que recopile datos cuantitativos y cualitativos sobre las víctimas, los tratantes y los clientes.
- Establecer sistemas de asistencia a la víctima y de prevención.

Las legislaciones latinoamericanas han comenzado a tener en cuenta las dificultades que la definición de trata del Protocolo de Palermo tiene para la persecución del delito. Estos países han ido tomando conciencia que esa definición favorece la trata y la facilitación y promoción de la prostitución ya que toma en cuenta los vicios del consentimiento de las víctimas y favorece a tratantes y proxenetas, y por ello se han apartado de la misma, y dejado de exigir los llamados medios (abuso, engaño etc.) para la configuración del delito.

- Colombia, en el año 2003 se tomó la definición de trata del Protocolo de Palermo, para llegar a la conclusión que debían apartarse de la misma, y en la reforma a su Código Penal, aprobada por el Congreso de ese país en el año 2005, se establece que el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida por el artículo relativo a la trata no se tendrá en cuenta ni constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal del tratante, ni la asociación ilícita ni que sea transnacional. Los legisladores de ese país, expresamente dicen:

Artículo 188A Trata de Personas. El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales, mensuales, vigentes.

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual o cualquier otra forma de explotación.

El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal.

- Perú también modificó su legislación en el año 2004, en relación a la trata con fines de prostitución y en los demás delitos conexos, apartándose de la definición del Protocolo en cuanto a la exigencia de vicios de consentimiento, asociación ilícita y carácter transnacional: El

Congreso de ese país estableció: el tipo penal sin hacer diferencia entre víctimas mayores y menores. Si hay vicios del consentimiento, éstos son agravantes de los delitos. Dice este código:

Artículo 179º.- Favorecimiento a la prostitución

El que promueve o favorece la prostitución de otra persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

Artículo 180º.- Rufianismo

El que explota la ganancia obtenida por una persona que ejerce la prostitución será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Artículo 182º.- Trata de personas

El que promueve o facilita la captación para la salida o entrada del país o el traslado dentro del territorio de la República de una persona para que ejerza la prostitución, someterla a esclavitud sexual, pornografía u otras formas de explotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

La pena será no menor de diez ni mayor de doce años, si media alguna de las circunstancias agravantes enumeradas en el artículo anterior.

Cómo dice el filósofo francés Edgar Morin “El fenómeno fundamental no es la pobreza material ni la fragilidad de los ingresos... el quid de la cuestión está también en la humillación que les infligen sin cesar aquellos que detentan el poder. La injusticia más grave no es la material sino la moral: ésta no se mide en dólares, sino en el hecho de que algunos hombres están privados de los derechos fundamentales de los que disfrutaban los poderosos.” Es el deber del Estado de actuar para evitar que se esclavice y explote sexualmente a las mujeres y niños más necesitados

Hoy, existe la posibilidad de esclavizar a las mujeres y niños más necesitados y explotarlos sexualmente. El Estado debe actuar para evitar esa injusticia que afecta la dignidad humana de las víctimas y que nos aliena a todos.

Atento lo expuesto, solicito entonces la aprobación del proyecto.

Jorge M. Capitanich.-

V

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º: Incorpórese el artículo 108 (bis) al Libro segundo, Título I,



Capítulo VI del Código Penal de la Nación Argentina, que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 108 (bis): Será reprimido con prisión de 2 (dos) a 4 (cuatro) años a toda persona que explotare, utilizare o aprovecharse a un menor de dieciséis años de edad, haciéndolo trabajar para su provecho personal u obligándolo a ejercer la mendicidad.

La pena será de prisión de 3 (tres) a 6 (seis) años, cuando en el caso del párrafo anterior se pusiera en riesgo la salud, la integridad o la vida del menor.

Artículo 2º: Incorpórese el artículo 108 (ter) al Libro segundo, Título I, Capítulo VI del Código Penal de la Nación Argentina, que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 108 (ter): El maximum y el minimun de las penas establecidas en el artículo precedente, serán aumentadas en un tercio cuando se trate de un menor discapacitado.

Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto Basualdo.-

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El siguiente proyecto de ley tiende a la incorporación del artículo 108 (bis) y el artículo 108 (ter) al Libro segundo, Título I, Capítulo VI del Código Penal de la Nación Argentina.

La creación de estos nuevos artículos en el ordenamiento jurídico penal, está dirigido a la inserción de nuevas figuras delictivas a los efectos de adecuarlas a necesidades que surgen de la realidad misma.

El espíritu de este proyecto es que niños y jóvenes se encuentran desprotegidos ante cualquier avance de la acción delictual llevadas a cabo por personas y a veces por bandas de delincuentes, que los usan como instrumentos para obtener una ventaja económica, utilizando distintos medios de coerción.

Cabe destacar que el artículo 108 (bis) establece que será reprimido con prisión de 2 (dos) a 4 (cuatro) años a toda persona que explotare o utilizare a un menor de dieciséis años de edad, obligándolo a trabajar o ejercer la mendicidad.

Hay que tener en cuenta que en este primer párrafo del artículo no se tipifica como conducta delictiva la mendicidad, sino la explotación de

niños y jóvenes, vale decir que la conducta delictiva descripta en el tipo penal está orientada a sancionar a los adultos que introduzcan u obliguen a niños o a niñas a trabajar o a mendigar con el objeto de obtener una ventaja económica.

Con respecto a la segunda parte del artículo, se agrava la pena de 3 (tres) a 6 (seis) años de prisión, cuando en el caso del párrafo anterior, se pusiera en riesgo la salud, la integridad o la vida del menor. Vemos que en este último párrafo del artículo se aumenta la escala penal en su mínimo y en su máximo, en razón de las consecuencias que puede traer aparejada dicha conducta, implicando serios problemas tanto psíquicos como físicos.

Por último, la incorporación del artículo 108 (ter) establece una calificante a este tipo de conductas por la gravedad que reviste, como es el caso de aquellas personas que sufren la persecución de estos inescrupulosos que se aprovechan de las condiciones indefensas en las que se encuentran.

Es por lo tanto que teniendo en cuenta los niveles de criminalidad que hoy padece la Argentina y de las distintas formas que se manifiestan, nos obliga a legislar sobre este tipo de hechos procurando medidas que concurran a solucionar este flagelo.

Por lo expuesto y considerando que se trata de conductas que se le tienen que aplicar sanciones penales, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Roberto Basualdo.-

## VI

### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

#### ARTÍCULO 1°.-

Modifícase el artículo 125 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 125: El que promoviere o facultare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediere el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de trece años.

Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediere engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, afín en línea recta ascendiente, ministro de algún culto

reconocido o no, tutor, curador o persona conviviente o encargada de su educación o guarda”.

#### ARTÍCULO 2°.-

Modifícase el artículo 125 bis del Código Penal de la Nación el que quedará redactado del siguiente modo:

“Artículo 125 bis: El que promoviere o facilitare la prostitución de menores de dieciocho años, aunque mediar el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años.

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión de cuando la víctima fuera menor de trece años.

Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediar engaño, violencia, amenaza abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también, si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, afín en línea recta ascendente, ministro de algún culto reconocido o no, tutor, curador, o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.”

#### ARTÍCULO 3°.-

Modifícase el artículo 127 bis del Código Penal de la Nación cuyo texto será el siguiente:

“Artículo 127 bis: El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de menores de dieciocho años para que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años.

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de trece años.

Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años cuando mediar engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también, si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, afín en línea recta ascendente, ministro de algún culto reconocido o no, tutor, curador, o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.”

#### ARTÍCULO 4°.-

Modifícase el artículo 127 ter del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 127 ter: El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una persona mayor de dieciocho años para que ejerza la prostitución mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también, si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, afín en línea recta ascendente, ministro de algún culto reconocido o no, tutor, curador, o persona conviviente o encargada de su educación o guarda, será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años.”

ARTÍCULO 5°.-  
Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María C. Perceval.

## FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Algunas iniciativas, que se enmarcan en el compromiso de avanzar en la protección de los derechos de niños, niñas, mujeres y varones, se han traducido en importantes reformas legales. Tal es el caso de la ley 25.807, que introdujo importantes modificaciones al título III del Código Penal, sobre “Delitos contra la integridad sexual”, al incluir y crear nuevos tipos penales, los cuales completan el espectro de las hasta entonces consideradas conductas ilícitas.

Sin embargo, persisten algunas deficiencias que creemos necesario revisar y mejorar. Entre ellas, las que a través del presente proyecto de ley pretendemos modificar. El mismo es reproducción del expediente S-38/04 de mi autoría, presentado en el mes de marzo de 2004 (reproducción –a su vez- del expediente 3269/02)

Actualmente, el artículo 125 del Código Penal pena la promoción y facilitación de la corrupción de menores de dieciocho años – agravándose la pena en el caso de menores de trece años – así como también la de mayores de dieciocho años.

Ahora bien, en el último párrafo de este artículo, se pune la corrupción de mayores de dieciocho años de edad, siempre y cuando la conducta se realice mediando determinadas circunstancias tipificadas en el mismo artículo. Una de estas circunstancias consiste en que el autor del ilícito sea ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de la educación o de la guarda.

Consideramos que la enunciación es incompleta, ya que según la legislación actual, no es punible el familiar afín en línea recta ascendente, ni el ministro de culto reconocido o no, ni tampoco el curador. De igual modo, esta parcialidad se repite en los artículos 125 bis, 127 bis y 127 ter del Código Penal.

El primero de ellos – el artículo 125 bis – reprime la promoción y facilitación de la prostitución de menores de dieciocho años, menores de trece y mayores de dieciocho, mediando las mismas circunstancias descritas en el artículo 125 in fine, remitiendo a la enumeración incompleta del delito de corrupción. Lo mismo sucede en el caso del artículo 127 bis que reprime la promoción o facilitación de la entrada o salida del país a menores de dieciocho años de edad.

El último caso tiene algunas diferencias. El artículo 127 ter pena la

promoción y facilitación de la entrada y salida del país de mayores de dieciocho años. Si bien establece el tipo penal a cada modo de comisión del delito – mediante engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción -, nada dice respecto del autor del ilícito, a diferencia de los artículos precedentemente comentados. Por ello, en este caso es necesario agregar a la enumeración completa de los posibles autores del delito: los actualmente mencionados en los artículos 125, 125 bis y 127 bis y las inclusiones propuestas en el presente proyecto de ley.

Insistimos en la necesidad de esta modificación, ya que existen denuncias de delitos como los más arriba mencionados, cometidos por un familiar afín en línea recta ascendente – tal sería el caso de un suegro o suegra, entre otros – que no conviva con la víctima; ministros de algún culto reconocido o no, y por el curador respecto de su curado. Deberían entonces ser sujetos pasibles de las sanciones contempladas en los artículos mencionados. Además, estas personas sí están contempladas como posibles autores de otros delitos incluidos en el título de delitos contra la integridad sexual, como es el caso del artículo 119 del Código Penal, que se refiere al abuso sexual.

La seriedad de estos delitos también se agrava por el vínculo que existe con la víctima, el deber de protección que tenía el victimario sobre ella y la relación de confianza que es quebrantada al cometerse el ilícito. En el caso del ministro de algún culto, además, éste ve favorecida la materialización de la conducta ilícita en el aprovechamiento de que a su figura se asocian conceptos de moralidad y honestidad.

En el caso del curador, a pesar de que al momento de interpretar la ley podría ser considerado al igual que el tutor o la persona encargada de la educación o de la guarda, creemos que debe ser incluido de manera expresa. Esto es así, porque es la persona que debe procurar el resguardo material y moral de su curado, incluso sin que para ello sea necesaria la convivencia.

Con el convencimiento de que es necesario avanzar en la protección de los/as más vulnerables, como es el caso de las víctimas de delitos sexuales, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.

María C. Perceval.

## VII

### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Ley contra el delito de Trata de Personas y  
Sistema de Información, Protección y Amparo a la Víctima

Art. 1º- De la trata de personas. Sustitúyase el artículo 127 bis del Código Penal, por el siguiente:

Será reprimido con una pena de 10 a 15 años de prisión el que promoviére o facilitare el traslado de una persona, dentro, hacia dentro o al exterior del territorio nacional, como así también el que lleve a cabo la captación o recepción, y/o conservación de la misma, con el fin de obtener por ella beneficios de cualquier índole, para si o para un tercero, a través de la explotación física y/o mediante alguno de los hechos contemplados en el Libro II, Títulos II y III del CPN o en el artículo 140 del mismo cuerpo legal.

La escala penal prevista se elevará a la mitad en su mínimo y su máximo cuando mediare alguna de las circunstancias contempladas en los incisos a), b), d), e) o f) del cuarto párrafo del artículo 119, o cuando:

1. la víctima fuere menor de 13 años,
2. hubiese habido peligro de muerte para la víctima en el proceso de captación, conservación y/o traslado de la misma,
3. los beneficios de la trata versen sobre narcotráfico,
4. se haya conservado o trasladado a la víctima a un lugar cuyo idioma desconociese y
5. cuando se hiciere del delito una actividad habitual.

El consentimiento prestado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo, no constituirá causal de exoneración o atenuación de la responsabilidad penal.

Art. 2º- Sustitúyase el artículo 124 del Código Penal, por el siguiente:

Se impondrá reclusión o prisión perpetua, cuando en los casos de los artículos 119, 120 y 127 bis resultare la muerte de la persona ofendida.

Art. 3º- Del arrepentido. Sustitúyase el artículo 41 Ter del Código Penal, por el siguiente:

Las escalas penales previstas en los artículos 127 bis, 142 bis y 170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, donde se encontrasen otras víctimas en análoga situación por causa de los mismos partícipes, o la identidad de otros también partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento.



En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de ocho (8) a quince (15) años.

Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes identificasen.

Art. 4º- De la exención de pena. Comprobado el delito de trata de personas, la víctima no podrá ser penalizada con ninguna sanción vinculada con hechos relacionados con la prostitución, migración o narcotráfico acaecidos durante el desarrollo del delito.

Art. 5º- Derógase el artículo 127 ter del CPN.

Art. 6º- Del Procedimiento. En el procedimiento penal del delito de trata de personas, se deberá garantizar:

- a) La privacidad y la identidad de las víctimas, pudiendo ser aplicados los beneficios descriptos en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
- b) La información a la víctima del proceso, de su situación legal y sus derechos, en un idioma de su comprensión.
- c) La participación voluntaria de la víctima en el proceso, con el fin de manifestar opiniones, proporcionar pruebas, etc., sin perjuicio de las limitaciones por su seguridad del programa descripto en el inc. a).
- d) Alojamiento apropiado, alimento y medidas de seguridad e higiene personal a la víctima, como así también asistencia psicológica, médica y jurídica adecuada a cada tipo de víctima.

Art. 7º- Programa de Prevención y Asistencia. Créase el Programa Federal de Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas, del cuál participarán representantes de La Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran. Estos representantes deberán ser personas especializadas en la materia vinculada al delito de trata de personas a juicio de las jurisdicciones designantes. Su asiento estará en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Los gastos que demande el cumplimiento del Programa se imputará al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación en el Presupuesto Federal de la Administración Nacional.

Art. 8º- El producto de los bienes incautados a los tratantes de personas, cuando estos bienes provengan directamente de la actividad ilícita, o hayan sido utilizados como medio o instrumento de la misma; así como el producto de los bienes incautados a las personas que a sabiendas adquieran, resguarden, inviertan, transformen, custodien, o administrasen bienes que tengan su origen

mediato o inmediato en actividades de trata de personas, integrarán el fondo para el funcionamiento del programa del artículo anterior.

Art. 9º- De los objetivos del Programa. El Programa tendrá como fin:

- a) Prevenir y erradicar la trata de personas.
- b) Asistir, proteger y amparar íntegramente a las víctimas.
- c) Insertar o reinsertar a las víctimas en la sociedad y en el núcleo familiar, cuando corresponda.

Art. 10º- De las funciones del Programa. El programa tendrá como función:

- a) Proporcionar empleo y educación necesaria a la víctima cuando no opte por ser repatriada.
- b) Proporcionar asistencia jurídica, médica y psicológica especial y adecuada a cada tipo de víctima.
- c) Proporcionar alojamiento adecuado a la víctima hasta el tiempo que se considere necesario para su sana inserción o reinserción social o hasta su repatriación.
- d) Brindar los medios necesarios para que la víctima pueda mantener una comunicación segura y constante con familiares o personas afines, sin perjuicio de las obligaciones del artículo 6 del Programa mencionado en el artículo 6, inciso a) de la presente ley.
- e) Realización de actividades de estudio e investigación entre organismos e instituciones estatales y ONGs vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres y niños.
- f) Llevar a cabo campañas de información y difusión de la problemática del delito y los derechos humanos, como así también tendiente a desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas.
- g) Sensibilizar y capacitar con perspectiva de género y de los derechos humanos, sobre los conceptos fundamentales de la trata de personas.
- h) Promover la necesaria colaboración de las autoridades migratorias y de seguridad nacional de nuestro país, y especialmente de aquellos países en los que se han evidenciado un elevado índice de configuración del delito de trata de personas.
- i) Brindar asesoramiento sobre el delito de trata de personas o derechos humanos a las instituciones públicas concernientes a la temática de la presente ley, cuando lo requieran.
- j) Elaborar informes anuales en los que se deberán incluir datos estadísticos que reflejen la situación actual relativa a la problemática del delito de trata de personas, principalmente en cuanto a la cantidad de casos detectados, procedencia de las víctimas, sexo, edad, así como de la efectividad de las medidas de protección adoptadas.

Art. 11º- Asistencia a las víctimas. Se le proporcionará a la víctima extranjera y a sus hijos, cuando sean estos niños, niñas o adolescentes, la documentación necesaria para permanecer en forma regular en el país, o los medios necesarios a fin de retornarla/los a su lugar de origen.

Art. 12º- Los establecimiento donde sean alojadas las víctimas, deberán ser adecuados y especiales, y en ninguna circunstancia se las alojará, sean éstas adultas o niñas, niños o adolescentes, ciudadanos argentinos o extranjeros, en comisarías, cárceles ni otros establecimientos de detención o de condena.

Art. 13º- Las víctimas niñas, niños o adolescentes del delito de trata de persona, se encuentran expresamente amparados por la ley 26.061.

Art. 14º- El Poder Ejecutivo reglamentará, en un plazo máximo de 60 días, la composición y funcionamiento del Programa Federal de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas, creado en el artículo 7 de la presente ley.

Art. 15º- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.

Art. 16º- Comuníquese el Poder Ejecutivo.

Haide Giri.

## FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El tráfico o trata de personas es considerado por la comunidad internacional como la forma de esclavitud del siglo XXI. Esta modalidad delictiva viola indiscutiblemente una amplia gama de derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad, a la honra, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo en condiciones dignas y justas, al acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a no ser sometidos a tratos crueles e inhumanos y a tener una familia, entre otros.

En el mundo, cada año alrededor de cuatro millones de mujeres y niñas son literalmente vendidas para ser sometidas a la esclavitud o a la prostitución. Sólo en 2002, según un estudio realizado por UNICEF, un millón doscientos mil niños y niñas fueron traficados internacionalmente con fines de explotación sexual o laboral.

En América Latina, dos millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de la explotación sexual, comercial y laboral, dentro y fuera de las fronteras de sus países de origen. En la triple frontera que comparten la Argentina, Paraguay y Brasil al menos 3500 niñas, niños y adolescentes sufren como consecuencia de esta modalidad. La Organización Internacional del Trabajo estima que en nuestro país hay al menos medio millón de personas involucradas en la trata y el tráfico sexual, con un promedio de diez casos por día.

Nuestro país ha reconocido este flagelo a partir de la ratificación de numerosos convenios internacionales. Sin embargo, no ha podido reflejarlo apropiadamente en la legislación interna, situación que conlleva deficientemente a una protección de las víctimas.

La actual legislación penal Argentina contiene en los arts. 127 bis y 127 ter la tipificación del delito conocido como Trata de Personas. El mismo se refiere al tráfico de personas, pero limitando su configuración al único supuesto de la explotación sexual.

Entre los numerosos instrumentos en que ha participado el estado argentino en combatir la trata, pueden mencionarse:

El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas), La Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo, La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, El Convenio Suplementario de 1956 sobre la Abolición de la Esclavitud, del Tráfico de Esclavos y de las Instituciones y Prácticas análogas a la Esclavitud, los Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la Eliminación del Trabajo Forzados, el Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (1999), la Convención Sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanas o Degradantes, La Cuarta Conferencia Internacional Sobre la Mujer (Beijing, 1995). También, y en este mismo sentido, la Argentina, mediante ley 25.632, ha aprobado la “Convención Internacional contra el Crimen Transnacional Organizado” y sus protocolo “para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños” y “contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra”, donde los fines expresados y adheridos por los Estados son principalmente prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a mujeres y niños; proteger y ayudar a las víctimas de dicho delito, respetando plenamente sus derechos fundamentales; además de promover la cooperación entre los Estados parte, para lograr esos fines.

El 20 de junio de 2005, en una reunión de Presidentes de los Estados parte del MERCOSUR y de los Estados Asociados, nuestro país ha ratificado su compromiso en la lucha por la seguridad y los Derechos Fundamentales de las personas y contra la delincuencia transnacional organizada, destacando además el compromiso al abordaje de un trabajo coordinado y conjunto para el fortalecimiento de políticas que combatan el creciente mal de la Trata de Personas.

Cabe destacar la reciente resolución de la Unión Interparlamentaria adoptada por consenso por la 113ª Asamblea (Ginebra, 19 de octubre de 2005), la cual estableció que se “alienta a los gobiernos y a los parlamentos de los países de origen y de destino a cooperar en el manejo de los flujos migratorios para combatir la trata y el contrabando de seres humanos, que se encuentran entre las peores formas de explotación y violación de los derechos fundamentales de los emigrantes, en particular las mujeres y los niños, de manera de identificar las políticas y las prácticas que son discriminatorias contra las mujeres, y asegurar que las desigualdades entre hombres y mujeres no sean reproducidas ni exacerbadas en los procesos migratorios” y “demanda además a los gobiernos a prestar una atención particular a los niños emigrantes, en particular a los menores no acompañados y a los niños víctimas de la trata, y a proporcionarles ayuda y protección”.

Estos compromisos asumidos internacionalmente, deben traducirse a normas y mecanismos en el orden interno encaminadas a subsanar las deficiencias legislativas al respecto. Nuestro país, como ya se ha mencionado, no cuenta con normas que reflejen la gravedad del delito y no resultan adecuadas para desalentar la trata de personas y enjuiciar a los delincuentes.

En la actualidad, en países como el nuestro, en los que aún no fueron sancionadas normas específicas que tipifiquen y sancionen el delito de trata de personas, los jueces recurren a la aplicación de figuras alternativas, como la promoción de la prostitución. Pero la falta de una normativa específica limita su accionar y el desarrollo de políticas públicas para combatir este crimen.

A efectos de dotar al Estado de herramientas legales para abordar esta problemática en forma adecuada, y con un amplio alcance, el presente proyecto normativo amplía la legislación penal vigente, y le otorga un íntegro tratamiento a las víctimas de este delito mediante la implementación de un adecuado programa estatal.

Un concepto amplio de la figura de la trata de personas, posibilitará que el acometimiento de mucho hechos, que no son castigados actualmente, o lo son, pero en virtud de una figura penal alternativa, sean perseguido adecuadamente. Es así como se incorpora el traslado intrafronteras o interprovincial como elemento constitutivo del delito, como así también diversos fines del acometimiento, como la explotación laboral o la extracción de órganos.

El proyecto incluye además diversas agravantes a la figura, fundadas en la mayor peligrosidad del autor/es, estado de mayor indefinición, daño grave, peligro o muerte en la/s víctima/s, o el fin o el medio con que se comete del delito. Especial atención merece la agravante dativa, ya que las tendencias de la trata y el tráfico de niños, niñas y adolescentes en América Latina resultan que son cada vez más



jóvenes las víctimas y más numerosas, tal como señala el representante regional de la Organización Internacional para las Migraciones, Eugenio Ambrosi. El menor, como sujeto más vulnerable al delito, debe contar con una adecuada protección: “A mayor indefensión, debe ser mayor la tutela penal.”

A partir de la exclusión del consentimiento prestado, como causal de exoneración penal, ya que la explotación nunca es querida per se, y de la sustracción en la figura de medios que vicien la voluntad, como violencia, amenaza o abuso de autoridad, cuya falta de prueba de su existencia hacen muchas veces imposible la aplicación de la figura, posibilitará la existencia de un arma más eficaz para el castigo y erradicación del delito.

Posteriormente, se propone ampliar los supuestos del art. 41 Ter del CPN e incorporar a la trata de personas como tercer delito que lo contempla. La trata es un delito donde la múltiple y conjunta participación criminal es corriente, por lo que la posibilidad de la inserción del instituto del arrepentido podrá funcionar como medio para desarticular organizaciones y poder socorrer a un mayor número de víctimas.

La prohibición de aplicar sanciones relacionadas con la migración, prostitución o narcotráfico a los sujetos pasivos del delito, significa que no se debe ver a los mismos como delincuentes, sino como víctimas de un delito.

El proyecto propone una modificación oportuna del delito de trata de personas, pero cuyo contenido no escape al Código Penal. Un código es un cuerpo legal que contiene un conjunto de normas referentes a una materia específica que están dispuestas en forma metódica y sistemática, creando un todo único. Es así como el proyecto, al menos en lo que hace a la calificación del delito, se resiste al desmembramiento del código, negándose a contribuir a una tendencia generadora de un sinfín de leyes dispersas y desintegradoras.

Por otra parte, se crea el “Programa Federal de Asistencia a las Víctimas de la Trata de personas” por el cual se intenta abordar la problemática de una forma integral teniendo como finalidad prevenir y erradicar la trata de personas, asistir, proteger y amparar íntegramente a las víctimas, así como insertar o reinsertarlas en la sociedad y en el núcleo familiar del que fuere sustraída, cuando pudiere corresponder.

En el esfuerzo de asistir, proteger y amparar a las víctimas, mediante este programa, se les proporcionará asistencia médica y psicológica en forma especializada, los medios necesarios a fin de que retornen a sus hogares, cuando esto sea de su elección y siempre que resulte propicio o bien la documentación necesaria para permanecer en forma regular en el país cuando opten por permanecer en el territorio, posibilidades de empleo y educación cuando la víctima no opte por ser



repatriada, alojamiento adecuado hasta su plena reinserción social o su repatriación.

Por todos estos fundamentos, y los que expondré oportunamente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

Haide Giri.

## VIII

### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

### PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS; Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS

#### TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° - Objeto. La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir la trata de personas y asistir a sus víctimas.

Artículo 2° - Definición de trata de personas. Se entiende por trata de personas la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero-, y la acogida o la recepción de personas, con fines de explotación, cuando mediaré engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción.

En las situaciones descriptas precedentemente, no se tendrá en cuenta el consentimiento de la víctima aunque se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el párrafo anterior.

Artículo 3° - Trata de personas menores de dieciocho (18) años. La captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero-, y la acogida o la recepción de personas menores de dieciocho (18) años con fines de explotación, se considerará trata de personas aún cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el artículo 2°.

Artículo 4° - Definición de explotación. A los efectos de la presente ley se entiende por explotación:

- a) mantener a una persona en condición de esclavitud;
- b) someter a una persona a prácticas análogas a la esclavitud;
- c) obligar a una persona al trabajo o servicios forzados;

- d) mantener a una persona en condición de servidumbre, inclusive servidumbre sexual;
- e) promover, facilitar, desarrollar y obtener provecho de cualquier forma de explotación sexual comercial; y
- f) extracción ilícita de órganos humanos.

## TÍTULO II

### DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS

Artículo 5° - Derechos. Son derechos de las víctimas de la trata de personas:

- m) A recibir información en un idioma que comprendan;
- n) A que se les proporcione alojamiento apropiado, alimentación y se facilite su higiene personal;
- o) A contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita;
- p) A prestar testimonio en condiciones especiales de protección, y a la protección frente a toda posible o efectiva represalia;
- q) A ser informada de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de las consecuencias del proceso;
- r) A ser oída y que se tenga en cuenta su opinión en todas las etapas del proceso;
- s) A que se proteja su identidad e intimidad;
- t) A oponerse a la realización de peritajes sobre su cuerpo o, en caso de consentirlos, a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;
- u) A iniciar procedimientos para la restitución de sus derechos y obtención de indemnización;
- v) A permanecer en el país, de conformidad con la Ley, y a recibir la documentación que acredite tal circunstancia;
- w) A que se les facilite el retorno al lugar en el que estuviere asentado su domicilio.
- x) A ser incorporadas en el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas;
- y) En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos precedentemente enunciados, se deberá velar porque los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales, prohibiéndose, sin excepción, los careos con el agresor o testigos.

El acceso de las víctimas de la trata de personas a los recursos de asistencia, en todos los casos, será voluntario y gratuito.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, las medidas de protección de derechos aplicables no podrán en ningún caso resultar restrictivas de sus derechos y garantías, ni implicar privación de la libertad. Se procurará, en la medida de lo posible, la posibilidad de reintegración del niño, niña o adolescente a su familia nuclear o ampliada y/o a su comunidad.

Artículo 6° - Privación de la libertad de las víctimas. En ningún caso se alojará a las víctimas de la trata de personas, sean éstas mayores o

menores de 18 años de edad, en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o destinados al alojamiento de personas prevenidas, procesadas o condenadas.

Artículo 7° - Derecho a la privacidad y reserva de identidad. En ningún caso se permitirán reglamentos o disposiciones administrativas en virtud de las cuales las víctimas de la trata de personas deban inscribirse en registro especial alguno, poseer un documento especial o cumplir algún requisito con fines de vigilancia y notificación.

Los funcionarios intervinientes deberán asegurar reserva en relación con la identidad de las víctimas de la trata de personas.

Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales.

### TÍTULO III DEL RÉGIMEN PENAL Y PROCESAL DE LA TRATA DE PERSONAS

Artículo 8° - Incorpórese como artículo 145 bis al Capítulo I Delitos contra la libertad individual, del Título V Delitos contra la Libertad, del Código Penal de la Nación, el siguiente texto:

“Artículo 145 bis.- El que capte, transporte y/o traslade -ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero-, acoja o reciba personas menores de dieciocho (18) años, aunque mediere el consentimiento de la víctima, con fines de explotación será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años.

La pena será de seis (6) a quince (15) años de prisión cuando la víctima fuera menor de trece (13) años.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la pena será de diez (10) a quince (15) años, cuando mediere engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuere ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de la educación o guarda”.

Artículo 9° - Incorpórese como artículo 145 ter al Capítulo I Delitos contra la libertad individual, del Título V Delitos contra la Libertad, del Código Penal de la Nación, el siguiente texto:

“Artículo 145 ter.- El que capte, transporte y/o traslade -ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero-, acoja o reciba personas mayores de dieciocho (18) años, cuando mediere engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción con fines de explotación será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años”.

Artículo 10° - Refórmense el artículo 33 Competencia del Juez Federal , del Capítulo II Competencia, de la Sección Primera Competencia en razón de la materia, del Título III El Juez, del Libro I Disposiciones

generales, del Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 33.- El Juez Federal conocerá:

1) En la instrucción de los siguientes delitos:

e) Los delitos previstos por los artículos 142 bis, 149 ter, 180, 189 bis (1), (3) y (5), 212 y 213 bis del Código Penal. También serán de exclusivo conocimiento de la justicia federal los delitos previstos en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal vinculados a la trata de personas con fines de explotación”.

Artículo 11° - Incorpórese como inciso f) al artículo 79 del Capítulo III Derechos de la víctima y el testigo, del Código Procesal Penal de la Nación, el siguiente texto:

“Artículo 79.- Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos:

f) en los supuestos de trata de personas será obligación del director de la investigación gestionar ante los organismos gubernamentales o no gubernamentales lo siguiente:

1) alojamiento adecuado, manutención, asistencia médica, psicológica, residencia temporaria -ante las autoridades de migraciones-, medios de subsistencia y educación,

2) la repatriación, si así lo deseara el interesado y se dieran las condiciones de seguridad en el país de origen,

3) adoptar los procedimientos para que las declaraciones de las víctimas y testigos se lleven adelante por los medios técnicos – videoconferencias- que impidan poner en peligro su integridad física o psicológica;

4) proveer las medidas pertinentes para lograr la seguridad física de las víctimas y testigos, como ser: reubicación de domicilios y teléfonos, prohibición de acceso a ellos aún para las partes;

5) obtener la inclusión en el Programa Nacional de Protección de Testigos en el modo señalado por la Ley 25.764.”

Artículo 12° - Incorpórese un artículo 250 quater al Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 250 quater.- En los supuestos en los se investiguen algunas de las hipótesis del delito de trata de personas –con independencia de la edad de ellas- se seguirá el siguiente procedimiento:

a) previo a interrogar a la víctima será evaluada por un psicólogo, que dará cuenta -a quien tenga la dirección de la investigación- si puede declarar y en su caso cuando podrá hacerlo, y todos los pormenores a los que accedió;

b) en este caso, previo a declarar la víctima se le hará saber el alcance del acto;

- c) de acceder a prestar declaración, la misma será desarrollada por el tribunal con asistencia de un psicólogo, y en un gabinete acondicionado especialmente al efecto, no siendo factible que las partes tomen intervención directa en el interrogatorio, el cual se desarrollará conforme el apartado d) del art. 250 bis de este Código, debiendo filmarse el acto;
- d) se evitará el contacto entre imputado/s y víctima/s, debiendo en su caso adoptarse los medios técnicos para el desarrollo de las audiencias y demás actos”.

Artículo 13° - Modifíquese el artículo 121 del Capítulo VI Delitos contra el Orden Migratorio, del Título X De la Autoridad de Aplicación, de la Ley 25.871 de Política Migratoria Argentina, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 121.- Las penas establecidas en el artículo anterior se agravarán de cinco (5) a quince (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de ocho (8) a veinte (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero”.

Artículo 14° - Deróguense los artículos 127 bis y 127 ter del Capítulo III, del Título III Delitos contra la Integridad Sexual, del Código Penal de la Nación.

## TÍTULO V

### PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS

Artículo 15° - Creación del Programa. Créase el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 16° - Objetivos y Funciones del Programa. Son objetivos del Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas:

- a) Prevenir la trata de personas, prestando especial atención a mujeres, niñas y niños;
- b) Promover la articulación interinstitucional entre organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil a los fines de proteger y promover los derechos de mujeres, niños y niñas;
- c) Garantizar la restitución de derechos de las víctimas de la trata de personas, y el respeto y protección de sus derechos humanos;
- d) Elaborar protocolos de trabajo y asistencia interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la asistencia y reintegración familiar y social de las víctimas de la trata de personas y a mejorar la detección, persecución y desarticulación de las redes de trata de personas, articulando y optimizando los recursos disponibles;

- e) Asegurar el acceso de las víctimas de la trata de personas a servicios de atención integrales, accesibles y gratuitos de asistencia médica, psicológica, social y jurídica, previniendo su revictimización;
- f) Organizar capacitaciones y sensibilizaciones a fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y fiscales sobre la problemática, su prevención, tratamiento y asistencia a las víctimas de la trata de personas, con perspectiva de género y de derechos humanos;
- g) Promover una mayor cooperación e intercambio de información entre las autoridades migratorias y las fuerzas de seguridad nacionales y extranjeras;
- h) Participar en el diseño de aquellas políticas y medidas necesarias para asegurar la protección y la asistencia de las víctimas de la trata de personas;
- i) Promover la articulación con organismos regionales e internacionales de prevención y monitoreo de la trata de personas;
- j) Promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral destinadas a monitorear, prevenir y erradicar la trata de personas;
- k) Implementar una línea telefónica gratuita a los fines de receptar denuncias e inquietudes;
- l) Elaborar programas y campañas de concientización pública destinadas a sensibilizar e informar sobre la trata de personas y difundir medidas para su prevención;
- m) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre trata de personas, y su publicación periódica, entre organismos estatales y no gubernamentales.

## TÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17° - Presupuesto. El Presupuesto General de la Nación preverá las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 18° - Reglamentación. Esta Ley será reglamentada en un plazo máximo de sesenta (60) días, contados a partir de su sanción.

Artículo 19° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

María C. Pérceval.- Alicia M. Kirchner.

## FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Tras el fin de la Guerra Fría, comenzaron a declinar las probabilidades de guerras entre Estados y, a pesar de la emergencia de oportunidades para la construcción de paz y seguridad, también aparecieron nuevas amenazas, desafíos y conflictos. En este nuevo escenario, ya no se trata de amenazas fundamentales a la integridad



de los Estados, sino que afectan básicamente a los individuos y/o las instituciones.

Estas nuevas amenazas se caracterizan por el carácter intraestatal de los conflictos<sup>1</sup>; la complejidad de los problemas globales y su impacto sobre millones de personas; la percepción de vulnerabilidad y la reducción de las capacidades nacionales para enfrentarlos. Estos conflictos pueden darse en forma simultánea, abarcando operaciones tales como tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, secuestro extorsivo, corrupción, tráfico de armas, prostitución, tráfico de mujeres y/o niños y niñas, tráfico y trata de órganos, terrorismo, entre otros.

Frente a esta situación, los Estados adoptan diversas estrategias caracterizadas por formas asociativas y cooperativas en materia de seguridad destinadas a la prevención.

En este contexto se desarrolla el concepto de “seguridad humana”, que implica respetar y proteger la libertad y los derechos de los individuos, adoptando medidas preventivas para reducir su vulnerabilidad y minimizar los riesgos ante los cuales están expuestos.

Colocar al ser humano como referente central de las políticas públicas y del accionar de los Estados implica un cambio estratégico de la percepción del sistema internacional. Asimismo, sitúa como objetivo común resolver las necesidades de millones de seres humanos que se ven afectados por grandes y crecientes inseguridades y necesidades en el ámbito político, económico, social y cultural. De esta manera, la protección de la persona se convierte en el eje central de la seguridad internacional del nuevo siglo<sup>2</sup>.

Tal como se menciona en las resoluciones de las Naciones Unidas, la seguridad y el desarrollo deben ser comprendidos desde una perspectiva de derechos humanos, basados en “la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la interrelación de todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”<sup>3</sup>.

Es en este contexto que entendemos la trata de personas: una forma extrema de explotación del ser humano que ha adquirido dinámicas novedosas y transnacionales.

También es un negocio sumamente lucrativo y con escasos riesgos para sus organizadores, pero altamente ultrajante para las millones de personas, especialmente niños, niñas y mujeres que son explotados/as bajo condiciones de esclavitud principalmente en la industria del sexo.

---

<sup>1</sup> En los diez años siguientes al fin de la Guerra Fría se desarrollaron 103 conflictos armados, de los cuales 93 correspondieron a conflictos internos. En estos, el 90 por ciento de las víctimas fueron civiles. Fuentes, Claudia, “*Cumbre del Milenio y Seguridad Humana*”.

<sup>2</sup> Fuentes, Claudia F., investigadora FLACSO–Chile, Exposición en *Cumbre del Milenio y Seguridad Humana*, año 2000.

<sup>3</sup> Comisión de Derechos Humanos. Resolución E/CN.4/RES/2003/24, párrafo 9.

Esta forma de esclavitud moderna, representa una de las más graves violaciones de los derechos humanos de las personas y, tal como afirma Kofi Annan<sup>4</sup>, Secretario General de las Naciones Unidas, la ha calificado como “una afrenta y una plaga mundial” que se lleva a cabo en todo el mundo con una impunidad casi absoluta y en muchos casos acarreando sanciones menos severas que las estipuladas para el tráfico de drogas.

Los pocos datos estimativos sólo dan una idea de este fenómeno transnacional, su extensión y profunda transformación y, en particular, las consecuencias que los nuevos delitos tienen para sus víctimas.

Para estos grandes sectores de personas que ven diariamente vulnerados sus derechos, es necesario pensar legislaciones y respuestas integrales porque “hay que recordar con firmeza que la protección social no es solamente el otorgamiento de ayudas en favor de los más desamparados para evitarles una caída total. En el sentido fuerte de la palabra, es la condición de base para que todos puedan seguir perteneciendo a una sociedad de semejantes”<sup>5</sup>.

Vivir en la inseguridad día a día es ya no poder hacer sociedad con sus semejantes y habitar en su entorno bajo el signo de la amenaza y no de la acogida y el intercambio. Esta inseguridad cotidiana afecta especialmente a las personas más desguarnecidas de otros recursos en materia de ingresos, hábitat y de las protecciones que brinda una situación social segura. De esta situación se favorecen las mafias.

La trata de personas, por un lado, visibiliza las contradicciones y el desigual grado de desarrollo de las sociedades y desnuda las dificultades de miles de ciudadanos y ciudadanas para lograr una vida acorde a sus expectativas en el lugar donde nacieron. Por el otro, implica una constelación de nuevos problemas políticos, económicos, sociales, legales y culturales para los países de tránsito y destino de los flujos migratorios, para los que buena parte de las políticas públicas tradicionales no estaba preparada: implica nuevos desafíos de integración social y de tolerancia cultural en un mundo crecientemente competitivo y violento<sup>6</sup>.

Tal como mencionábamos, no hay cifras certeras cuando se trata de la clandestinidad. Sin embargo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), manifiesta que la trata y el tráfico de personas son delitos que se incrementaron de forma alarmante en los últimos años, debido a las difíciles condiciones de vida en los países en desarrollo y al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados.

---

<sup>4</sup> Annan, Kofi, “*Un concepto más amplio de libertad*”, ONU, marzo 2005.

<sup>5</sup> Castel, Robert. “*La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?*”, Buenos Aires, Manantial, 2004

<sup>6</sup> Petit, Juan Miguel; *Migraciones, vulnerabilidad y políticas públicas. Impacto sobre los niños, sus familias y sus derechos*; Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE); División de Población del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Santiago de Chile; Mayo de 2003.

Para las Naciones Unidas, anualmente se trafican 4 millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, de quienes las mafias obtienen ganancias que oscilan entre los 8 y 10 mil millones de dólares al año. Según UNICEF, la trata de niños y niñas mueve 8.500 millones de euros al año<sup>7</sup>.

Diversos organismos internacionales (UNICEF, la Cruz Roja Internacional, Media Luna Roja) afirman que la trata de personas ocupa el tercer lugar como actividad lucrativa ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas y del de armas.

Por esta razón, las organizaciones internacionales de derechos humanos han introducido el tráfico y la trata de personas en los procesos de diálogo mundiales y regionales que abordan el fenómeno de las migraciones y las problemáticas a ellas asociadas.

Ejemplo de ello es la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos: contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (2000) que colocan en el centro de los debates actuales la complejidad de los flujos migratorios.

Tras la firma de dichos instrumentos, ratificados por nuestro país por la Ley Nº 25.632 (agosto de 2002) los Estados Parte han adoptado una serie de compromisos y obligaciones destinadas a prevenir y combatir la “trata de personas” - prestando especial atención a mujeres y niños, y a proteger y ayudar a sus víctimas, respetando plenamente sus derechos humanos.

El Protocolo de Palermo es un acuerdo internacional de gran alcance que pretende establecer prioridades y medidas para luchar contra la trata de personas, instaurando un lenguaje y una legislación global común para definirla, asistir a sus víctimas y prevenirla, estableciendo parámetros en materia de cooperación judicial e intercambios de información entre los países. Asimismo, proporciona los lineamientos y el marco normativo necesario para la prevención, persecución y cooperación judicial efectivas.

En los últimos años, distintos países, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, han promulgado leyes y han implementado planes de acción y estrategias relacionadas con la migración, particularmente destinadas a la lucha contra el tráfico y la trata de personas.

En Argentina, con cada vez mayor frecuencia se suceden las denuncias por parte de las fuerzas de seguridad, de los medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil y de particulares

---

<sup>7</sup> Clarín; *Más de un millón de chicos son traficados por año en el mundo*; 31/07/03

sobre la existencia de redes de traficantes de inmigrantes y de trata de personas, en particular de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Un informe del INADI del año 2005 sobre la discriminación en la Argentina señala que “la trata y tráfico de mujeres con el fin de prostituirlas es un negocio tenebroso que va en aumento en nuestro país”. Sobre ese tema, también indica que “en general se trata de mujeres jóvenes que son tentadas con la ilusión de conseguir trabajo en nuestro país y cuando llegan aquí se les quitan los documentos y se las reduce a condiciones de esclavitud y servidumbre sexual”<sup>8</sup>.

En el marco de un programa para la prevención y combate de la trata de mujeres organizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) junto con autoridades nacionales y organizaciones no gubernamentales de República Dominicana (octubre de 2001) se constató que numerosas mujeres dominicanas habían sido traficadas hacia la República Argentina entre los años 1996 y 2000. Por este motivo, la OIM desarrolló la investigación “Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en la Argentina”, sobre la base de entrevistas a mujeres de nacionalidad dominicana, cuyos resultados resultaron reveladores sobre la forma que fueron captadas en sus países con ofertas falsas por parte de los “captadores”<sup>9</sup>.

En junio de 2005, la OIM también denunció que Argentina es país de destino y de tránsito hacia Europa de mujeres y niñas de nacionalidad paraguaya. El organismo detectó 495 casos de mujeres traficadas, 34 por ciento de las cuales eran menores de 18 años<sup>10</sup>. Sin embargo, no debemos olvidar que también son objeto de trata – fronteras adentro – personas que viven en nuestro propio país.

Asimismo, UNICEF, en su informe “Situación de la Niñez y Adolescencia en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay: Desafíos y Recomendaciones” (diciembre de 2005), denunció al reclutamiento de niños niñas y adolescentes para explotación sexual comercial en Argentina, Brasil y Paraguay.

Por su parte, el informe del INADI reconoce que “no existen en nuestro país mecanismos institucionales adecuados y suficientes que se ocupen de manera sistemática de la prevención, investigación y sanción de la trata y tráfico de personas, ni tampoco de las mujeres que son explotadas sexualmente”.

Sin embargo, debemos destacar como innovadora la inclusión del Capítulo VI Delitos al orden migratorio (Título X De la Autoridad de Aplicación), en la ley de Migraciones (25.875, año 2003), donde se introduce el tema del tráfico de persona, estableciendo penalidades especiales relacionadas con este delito.

---

<sup>8</sup> INADI; Hacia un plan nacional contra la discriminación. La discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas; Buenos Aires, INADI, 2005

<sup>9</sup> Organización Internacional para las Migraciones: *Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en Argentina*; 2003

<sup>10</sup> Clarín; *Denuncian que en el país trafican a mujeres y nenas paraguayas*; 12 de junio de 2005

A pesar de la mejora que implicó esta nueva ley, Argentina debe profundizar y ampliar su legislación y las medidas administrativas relacionadas con los nuevos delitos y las nuevas formas que adquieren las vulneraciones de los derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas y niños.

Por ello, proponemos la presente iniciativa con el objeto de implementar medidas destinadas a prevenir la trata de personas y crear un sistema de asistencia integral a las víctimas, de conformidad con el Protocolo de Palermo y los Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas elaborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (E/2002/68/Add.1)

En este sentido, proponemos tipificar la trata de personas en el Código Penal de la Nación. Cualquier otra opción –como la creación de una ley especial-, conduciría a una dispersión normativa penal que dificultaría su coordinación y aplicación. De hecho, si revisamos la legislación de varios países de la Región, encontramos que la mayoría (Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica y Paraguay) ha modificado sus códigos penales para dar más jerarquía al tema en su legislación interna.

También sugerimos modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación en dos sentidos.

En primer lugar, modificando el artículo 33 en lo relativo a la competencia del Juez Federal. La jurisdicción federal es imprescindible por la misma gravedad del delito y porque se facilitaría la unidad de criterios y la celeridad en la resolución de las causas. Además, estas conductas raramente se desarrollan en un solo estado provincial – en el caso de la trata interna –, o nacional – en el caso de la trata externa. La competencia federal mejora la cooperación y asistencia jurídica en materia penal. Por otra parte, al ser un delito con componentes internacionales, suelen existir pedidos de extradición que pueden ser tramitados y resueltos por el mismo juez que investiga los hechos principales.

Asimismo, estas organizaciones realizan distintas actividades criminales facilitadas por el flujo de dinero rápido de obtener a través de la trata y por su estrecho contacto con otras organizaciones generalmente dedicadas al tráfico y la venta de estupefacientes, la puesta en circulación de dinero falso, y la adulteración de documentos de identidad – para procurar impunidad. Todos estos son delitos federales: el conocimiento de la causa y la concentración en un único magistrado, facilitaría la investigación.

Respecto de la segunda modificación; esta se refiere al artículo 79 del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto a los derechos de la víctima y el testigo.



Este tipo de delitos tiene como especificidad el proceso de sometimiento al que se ve expuesta la víctima, que genera en ella estrategias de supervivencia tales como la evitación, la identificación con el tratante y la insensibilización. Como consecuencia, las víctimas del delito no suelen colaborar con la investigación. Para revertir esta situación, se debe brindar a la víctima un nivel adecuado de asistencia que le permita revertir el cuadro de estrés postraumático y avanzar en su reinserción.

La modificación que proponemos – que responde a estos aspectos humanitarios como así también la voluntad de optimizar las investigaciones - incorpora un nuevo inciso donde se estipula el derecho de la víctima de la trata de personas a la asistencia integral; la repatriación en caso que así lo desee el interesado; a declarar en condiciones de seguridad y a obtener la inclusión en el Programa Nacional de Protección de Testigos (Ley 25.764)

También se propone que las entrevistas a las víctimas se desarrollen garantizando su protección y confidencialidad, estableciendo los procedimientos de las mismas, evitando la revictimización que significaría el enfrentamiento con los tratantes.

Finalmente, promovemos la creación de un Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional con las funciones –entre otras- de prevenir la trata de personas prestando especial atención a mujeres, niñas y niños; promover la articulación interinstitucional entre organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil; garantizar la restitución de derechos de las víctimas de la trata de personas, y el respeto y protección de sus derechos humanos; y elaborar protocolos de trabajo y asistencia interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la asistencia y reintegración familiar y social de las víctimas de la trata de personas.

Esta iniciativa ha contado con el valioso aporte del Dr. Alejandro Cilleruello, Secretario del Juzgado Criminal de Instrucción N° 10 de la Capital Federal, y de la Dra. Elizabeth Gómez Alcorta, Docente del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de Ley.

María C. Pérceval.- Alicia M. Kirchner.